Crónica anual de Derecho eclesiástico en los Estados Unidos (2010-2011). Parte II

José Ignacio RUBIO LÓPEZ

Profesor Estable

Facultad de Derecho Canónico. Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)

frjoseignaciourubio@gmail.com

SUMARIO: 1. Crónica de un año (2010-2011). 1.1. *Intervenciones gubernamentales*. 1.2. *Iniciativas legislativas*. 1.2.1. *Sesiones 2ª y 1ª del 111 y 112 Congreso federal*. 1.2.2. *Proyectos de ley y leyes estatales*. 1.2.2.1. *Derecho al matrimonio y uniones civiles*. 1.2.2.2. *Derecho a la vida e integridad física*. 1.2.2.3. *Política migratoria*. 1.2.2.4. *Política escolar*. 1.2.2.5. *Iglesias y lugares de culto*. 1.2.2.6. *Venta de alcohol en domingo y alimentos Kosher*. 1.2.2.7. *Símbolos religiosos*. 1.2.2.8. *Legislación anti-Sharia*. 1.2.2.9. *Libertad religiosa de trabajadores y funcionarios*. 1.2.2.10. *Protección general del derecho a la libertad religiosa y otros casos*. 1.3. *Novedades bibliográficas: libros, artículos y simposios*. 1.4. *Otras noticias de interés*. 2. Balance del año 2010-2011.

Tras ocuparnos de las principales decisiones jurisprudenciales en los Estados Unidos durante el año 2010-2011 en la primera parte de esta crónica publicada en el número 102, volumen 51 (2011), de la revista *Ius Canonicum*¹, damos cuenta ahora de las acciones emprendidas por la administración, tanto la federal como las estatales, así como diversas iniciativas legislativas en el Congreso de la Unión y en las Cámaras de algunos Estados. El cuadro de esta memoria anual será completado con las novedades bibliográficas y académicas de mayor interés, así como otras noticias relevantes. El balance final cerrará el análisis a la espera de la crónica del año siguiente 2011-2012.

1. CRÓNICA DE UN AÑO (2010-2011)

Recordemos en este momento que el periodo de tiempo tomado en consideración aquí es el comprendido entre los meses de octubre de un año y de julio del siguiente, en este caso, entre el lunes 4 de octubre del 2010 y el mes de julio del 2011. Como ya sabemos, estas fechas responden al año judicial (*term*) del Tribunal Supremo, principal protagonista de nuestra historia. En relación al contenido, reflejaremos aquí lo ocurrido en la Unión y en los Estados, fruto de sus poderes ejecutivos y legislativos, que estimemos de mayor interés para el derecho de libertad religiosa. El material ha sido escogido en función de su novedad, contenido y fin. A todo ello, añadiremos las principales aportaciones de la doctrina académica en libros y artículos, así como algunos de los congresos o simposios mantenidos en este espacio de tiempo sobre el hecho religioso. El último apartado lo reservamos a ciertas noticias que juzgamos de importancia por sus implicaciones personales o institucionales.

1.1. *Intervenciones gubernamentales*

Comenzando por la administración federal, el actual presidente Barack Obama no tuvo reparo en agradecer a Dios las muchas bendiciones recibidas para el país en la proclamación que firmó para el día de acción de gracias (el *Thanksgiving Day*, penúltimo jueves del año) del 2010. Y también como cada año desde 1996, en el 2011 se celebró en Estados Unidos un día dedicado a la libertad religiosa. Fue el 16 de enero en recuerdo del aniversario de la aprobación del *Virginia Statute of Religious Freedom* (1786) por iniciativa de Thomas Jefferson. Los presidentes escriben para la ocasión una proclamación y, con el

¹ Cfr. J. I. RUBIO LÓPEZ, *Crónica anual de Derecho Eclesiástico en los Estados Unidos (2010-2011). Parte I*, *Ius Canonicum* 51 (2011) 703-764.

discurso de tolerancia y de paz al que nos tiene acostumbrados (sin aquellas referencias tan características de Bush al *Almighty God*, aunque sí firmado *in the year of our Lord*), Obama hizo lo propio el 14 de enero cuando proclamó el decimosexto *Religious Freedom Day* e insistió en la defensa de esta libertad. Pocos días después, el 25 de enero, en el discurso sobre el Estado de la Unión, Obama habló de la diversidad religiosa de Estados Unidos, en relación a los ataques terroristas de Al-Qaeda y respecto a la derogación propuesta del clásico *Don't ask, don't tell* (DADT) sobre homosexualidad en el ejército. Al mes siguiente, en el *National Prayer Breakfast*² del 3 de febrero, el presidente Obama habló de Cristo como su Señor y Salvador, a pesar del alto porcentaje de población que le consideraba musulmán según una encuesta del *Pew Forum on Religion and Public Life* de agosto del 2010. Más adelante, el 5 de mayo se celebró el *National Day of Prayer* con proclamación presidencial firmada el 29 de abril en la que Obama ensalzó la libertad de dar culto o de no hacerlo³. Semanas después, en la proclamación para el *Memorial Day* del 2011 (último lunes de mayo, en este caso el día 30) Obama ofreció un escrito bajo el encabezado de «Prayer for Peace» indicando las 11 de la mañana como momento de oración por esa intención. Dicho todo esto, sí puede apreciarse, tanto en el presidente Obama como en la Secretaria de Estado, un uso más frecuente de la expresión «freedom of worship» en lugar de «freedom of religion» y, aunque se ha dicho que son intercambiables, otros insisten en que la primera es más limitada. Por último, cuando llegó el mes del Ramadán, Obama envió el 1 de agosto de 2011 sus mejores deseos a las

² Este desayuno singular es un evento anual que tiene lugar desde 1953 en la ciudad de Washington DC el primer jueves de febrero de cada año. Al Washington Hilton en Connecticut Avenue N.W. acuden alrededor de 3.500 invitados de unos 100 países. Quien se encarga de su organización es una fundación cristiana, *The Fellowship Foundation*, y si inicialmente fue llamado, *Presidential Prayer Breakfast*, su nombre cambió al actual de «National Prayer Breakfast» en 1970. Organizaciones seculares como *American Atheists* o la *Freedom From Religion Foundation* han criticado el acto como una violación de la separación exigida por el no establecimiento ante las implicaciones gubernamentales que existen toda vez que preside el acto el presidente de la nación. Obama lo ha hecho en los tres años que lleva en la Casa Blanca. En España fue dado a conocer por la participación en el mismo del presidente español Rodríguez Zapatero en el año 2010.

³ Este día de oración nacional, establecido por el Congreso norteamericano desde 1952, aunque sus orígenes pueden encontrarse en el primer presidente George Washington, tiene lugar el primer jueves de mayo de cada año. El presidente firma una proclamación en la que anima al pueblo americano a dedicar la jornada a la oración. Pues bien, como ya sabemos por la primera parte de nuestra crónica, la validez constitucional de esta práctica fue impugnada por la *Freedom From Religion Foundation* en la jurisdicción federal sin éxito, al ser desestimada el 14 de abril del 2011 por el séptimo circuito que anulaba así una decisión del año anterior de un tribunal federal de distrito de Wisconsin.

comunidades musulmanas de todo el mundo. El presidente ofreció en la Casa Blanca una cena tras el ayuno religioso del día (el *iftar*) a la que fueron invitadas familias musulmanas con allegados en las torres gemelas durante los sucesos del 11 de septiembre de 2001, pero también miembros del Congreso y del cuerpo diplomático. Precisamente, en el décimo aniversario de esos atentados y ante el asombro de muchos, ningún líder religioso o ministro de culto fue invitado a la ceremonia que se desarrolló como siempre en la zona cero de New York. Eso sí el presidente designó, en dos proclamaciones presidenciales firmadas el día 9 de septiembre, el fin de semana del viernes 9 al domingo 11 como *días de oración y recuerdo* y el día 11 de septiembre de 2011 como *día patriótico y nacional de servicio y recuerdo*, al tiempo que escogió el Salmo 46 como lectura apropiada para su discurso de la mañana del día 11 en una liturgia en la que el núcleo continuó siendo la lectura de los nombres de las víctimas. Finalmente, la Casa Blanca abrió en este mes de septiembre de 2011 una página en internet titulada «We The People, Your Voice in Our Government» para garantizar –como se indica en el lugar– el derecho de petición de todo americano protegido bajo la Primera enmienda. Pues bien, de lograr una demanda el apoyo de 5000 firmas en 30 días, un grupo de la Casa Blanca la estudiará y dará respuesta. Muchas cuestiones relativas al derecho de libertad religiosa se han visto implicadas en estas primeras semanas de vida. Parece que los grupos liberales han encontrado un nuevo foro de denuncia y –en atención a los datos ofrecidos a las 11.30 hora local del día 27 de septiembre de 2011, en esa página web (<https://www.whitehouse.gov/petitions#/petitions>)– han dejado constancia aquí de su malestar por la presencia del *under God* en la *Pledge of Allegiance* (hay 13.843 mil firmas que piden su retirada, convirtiéndose ésta en una de las más populares peticiones), o del lema «In God We Trust» de las monedas (unas 9.150 lo quieren fuera), y de su deseo de derogar la DOMA (8.982 personas). Las sospechas de los republicanos a esta nueva iniciativa de la administración Obama pueden verse confirmadas en estos resultados.

Tras el presidente del gobierno, las iniciativas de la administración federal en este campo de la libertad religiosa se concentran en dos Departamentos, los de Justicia y Estado⁴. El primero de ellos, el *United States Department*

⁴ Esto no supone que otros departamentos federales no hayan tomado decisiones en materia de libertad religiosa. En este sentido, por poner un ejemplo, el 25 de marzo del 2011, la USAID (*US Agency for International Development*) propuso enmendar su normativa relativa a la participación de organizaciones religiosas en sus programas de desarrollo a fin de que esos fondos pudieran ser empleados en la adquisición, construcción o rehabilitación de edificios destinados a actividades religiosas siempre que el programa de financiación tuviera un propósito secular.

of Justice (USDOJ), está encomendado a su actual 82 *Attorney General* que es Eric Holder, en el cargo desde febrero del 2009, fecha en la que sucedió a Michael Mukasey tras el paso por el Departamento de Alberto Gonzales. En este Ministerio, la *Civil Rights Division* es dirigida por un asistente del fiscal general, Thomas E. Perez desde octubre del 2009 en sustitución del anterior asistente Wan J. Kim. En el mes de septiembre del año 2010 esta División de Derechos Civiles publicó un informe de 37 páginas dando a conocer el trabajo de la sección. El escrito dedicó un apartado específico a la discriminación religiosa centrado en la garantía federal de la RLUIPA del 2000. En este sentido, el 22 de septiembre de ese mismo año, coincidiendo con el décimo aniversario de la ley, el Departamento publicó también un informe de 14 páginas sobre la misma en el que se levantaba acta del trabajo realizado en defensa del derecho de libertad religiosa en los dos campos contemplados por ella. De la *Civil Rights Division* dependen once secciones, entre ellas la *Special Litigation Section* encargada de velar por el efectivo reconocimiento de los derechos civiles, como el de libertad religiosa, y evitar cualquier discriminación en este sentido. Jonathan M. Smith la dirige hoy y en sus manos está el cumplimiento de las disposiciones de la RLUIPA. A esta sección habría que añadir la posición del *Special Counsel for Religious Discrimination* que recae, desde su creación por la administración Bush en 2002, en la persona de Eric Treene y que se encarga de coordinar las diversas áreas de posible discriminación (educación, trabajo, alojamiento, acceso a instalaciones, regulación urbana o prisiones). Antes de incorporarse al Departamento, Treene encabezaba el servicio jurídico de la *Becket Fund for Religious Liberty*. Finalmente, por lo que se refiere al periódico *Religious Freedom in Focus*, y aunque su periodicidad se ha visto reducida en los años Obama (cuatro números en el 2010 frente a los 8 de sus inicios en el 2004), en atención al contenido de los cuatro últimos números 43-46, entre los meses de septiembre del 2010 y mayo de 2011, cabe señalar: once casos de regulación urbana en el que se vio afectada la RLUIPA del 2000; siete acciones violentas, incendio o vandalismo, contra iglesias o centros religiosos en contra de la *Church Arson Prevention Act* de 1996; tres supuestos de personas internas en centros penitenciarios en contravención de la RLUIPA; dos casos de adaptación religiosa en el trabajo (uno de un profesor musulmán que quiso ausentarse y el otro de una mujer musulmana con velo) contrarios a la garantía del Título VII de la *Civil Rights Act* de 1964; un caso en el que un restaurante de New York no quiso servir a seguidores del grupo disidente chino *Falun Gong* en contra del Título II de la *Civil Rights Act* de 1964; y, finalmente, un caso de discriminación en materia de alojamiento que no parecía respetar la *Fair Housing Act* de 1968.

Pasando ahora al Departamento de Estado (*United States Department of State*, USDS), este Ministerio lo dirige en la actualidad Hillary Clinton, en el puesto desde el año 2009 en sustitución a Condoleezza Rice. En este Ministerio de Asuntos Exteriores los temas relacionados con el derecho de libertad religiosa en el orden internacional se confían a la sección del Departamento ocupada de la democracia y de los derechos humanos: la *Democracy and Global Affairs* dirigida por la subsecretaria Maria Otero. De esta última depende el *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* (DRL) bajo la dirección del *Assistant Secretary* Michael H. Posner, posición de la que depende el *Ambassador-at-Large for International Religious Freedom*, la actual Suzan Johnson Cook. Nombrada recientemente, el 16 de mayo del 2011, Cook sustituye en el cargo a John Hanford que, a su vez, había sucedido a Robert Seiple, el primer *Ambassador-at-Large*. Recordemos que este embajador es el que encabeza la *Office of International Religious Freedom* creada por la *International Religious Freedom Act* (IRFA) de 1998. Y es sabido que esta oficina se encarga de la confección y publicación del informe anual sobre libertad religiosa, el *Annual Report on International Religious Freedom* que por primera vez vio la luz en septiembre del año 1999. El duodécimo informe del año 2010, para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio del 2009 y el 30 de junio del 2010, fue publicado en noviembre del 2010. Como países de especial atención (*Countries of Particular Concern*, CPCs) en los que no es respetada la libertad religiosa y sobre los que Estados Unidos adopta una serie de medidas previstas en la IRFA figuran 8 países: Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán y Uzbekistán. Al año siguiente, el decimotercer informe anual, presentado el 13 de septiembre del 2011, sobre 198 países para los meses de julio a diciembre de 2010, comprende los mismos países como CPCs. Además de este importante trabajo, según consta en la página web del Departamento, durante este año del 2011 han tenido lugar en Washington DC diversas iniciativas dirigidas a combatir el anti-semitismo, así como la intolerancia contra los musulmanes. Por su parte, la *United States Commission on International Religious Freedom* (USCIRF), creada en la IRFA, sitúa 14 países como de especial atención (CPCs) en su informe de mayo de 2011: los trece del año anterior (Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Sudan, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam), a los que incluyó ahora Egipto. A esa lista se añadieron otros 11 países de especial vigilancia (la *Watch List*) que ya estaban en este elenco el año anterior (Afganistán, Bielorrusia, Cuba, India, Indonesia, Laos, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turquía y Venezuela).

Entrando ahora en el trabajo de los ejecutivos estatales, cada Estado de la Unión es dirigido por un Gobernador que tiene en su administración una agencia u oficina dedicada a los derechos civiles y que depende del *Attorney General* del Estado. Entre esos derechos figura el de libertad religiosa (tanto su libre ejercicio como el no establecimiento) reconocido en sus propias Constituciones y, en ciertos casos, también en su legislación estatal. No podemos hacer un repaso general pero sí indicar un par de ejemplos. En la costa este, el Estado de New York tiene una oficina de derechos civiles que, bajo el epígrafe de *Social Justice* y dependiente de su *Attorney General*, se ocupa de luchar contra la discriminación religiosa. Por su parte, en la otra costa, en California, la sección de derechos civiles dependiente de la oficina del *Attorney General* también se ocupa de la defensa de la libertad religiosa.

1.2. *Iniciativas legislativas*

En el aspecto que aquí nos ocupa de defensa del derecho de libertad religiosa, mientras el Congreso de la Unión se ocupó preferencialmente de la reforma sanitaria de Obama y de su política contraria a la declaración de homosexualidad en el ejército, los Estados se han preocupado de temas diversos que van desde el terreno de la enseñanza, la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo o de uniones civiles, hasta el rechazo de la Sharia, pasando por la política migratoria o la venta de alcohol en domingo.

1.2.1. *Sesiones 2ª y 1ª del 111 y 112 Congreso federal*

El periodo de tiempo que tomamos aquí en consideración conoció dos sesiones del Congreso de los Estados Unidos, la segunda del 111 Congreso (entre enero y diciembre de 2010) y la primera del 112 (desde enero de 2011). Pues bien, durante estos meses no se ha producido, en el orden federal, ninguna novedad importante en el área de la libertad religiosa, siendo entonces de aplicación –además de otras leyes más generales ya indicadas– la RFRA de 1993 y la RLUIPA del 2000. De todos modos, si resulta de gran interés ofrecer aquí algunas de las diversas iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la nación. El 23 de marzo del 2010 el presidente Obama pudo firmar por fin su anhelada reforma sanitaria en la *Patient Protection and Affordable Care Act* (PPACA), normativa corregida por la *Health Care and Education Reconciliation Act* que Obama firmó el 30 de ese mismo mes, que plantea problemas de conciencia en relación al aborto y a la contracepción. Poco tiempo después, a finales de mayo del 2010, en concreto el 28 de mayo, fue introducido por el demócrata Patrick Kennedy en la Cámara de Representantes (la cámara baja del Congreso) un proyecto de ley

(la *SAMHSA – Substance Abuse and Mental Health Services Administration – Modernization Act* de 2010, HR 5466) a fin de corregir los títulos V y XIX de la *Public Health Service Act* de 1944. El objetivo era controlar el uso de ciertas sustancias en programas de salud mental y el proyecto fue referido ese día al comité de la Cámara sobre energía y comercio. En el mes de agosto, un centenar de organizaciones religiosas, entre ellas la Conferencia episcopal de la Iglesia católica, dirigieron escritos a los miembros del Congreso en los que hacían constar sus objeciones a la iniciativa, en concreto a su disposición sobre contratación de personal por razones religiosas a fin de recibir fondos federales. Al mes siguiente, el 23 de septiembre del 2010, fue introducido un proyecto de ley en la misma Cámara de Representantes (HR 6216) con la intención de corregir el Título VI de la *Civil Rights Act* de 1964 («Por razón de raza, color u origen nacional, nadie en Estados Unidos será excluido de participar, se le negarán los beneficios de, o será sujeto a discriminación bajo algún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal») incluyendo también la religión y evitando así cualquier discriminación religiosa en las escuelas que recibieran dinero federal. El proyecto fue enviado al Comité judicial de la Cámara. Pues bien, introducida por el Representante demócrata Brad Sherman, esta iniciativa pretendía proteger a los estudiantes judíos, musulmanes y sijes de cualquier trato ofensivo en las escuelas y centros universitarios que recibieran fondos federales. Era la reacción esperada frente a la posición de la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación según la cual el Título VI de la ley del 64 no era de aplicación al tratamiento ofensivo antisemita de estudiantes judíos. Pero el año 2010 terminó con la firma el 22 de diciembre por el presidente Obama de otra de sus estelares reformas presentada en la Cámara de Representantes por Patrick Murphy, congresista demócrata por Pennsylvania, el 14 de ese mes, aunque ya se venía hablando de ello desde el mes de junio cuando Obama decidió hacer de ese mes el del orgullo gay por medio de una proclamación firmada el 28 de mayo. De nuevo aquí, ese proyecto de ley tenía claras implicaciones en materia de conciencia religiosa. Y es que la *Don't Ask Don't Tell Repeal Act* de 2010 superaba la política seguida en el ejército norteamericano de no manifestar la condición homosexual del militar ni preguntando (*don't ask*) ni contando (*don't tell*), es decir, DADT por sus siglas en inglés. Pues bien, según el texto de la ley, para que esta entrara en vigor era necesario el envío 60 días antes, al comité de Defensa del Congreso, de una certificación firmada, entre otros, por el presidente del gobierno, lo que tuvo lugar el 22 de julio del 2011 tras la petición del noveno circuito dirigido al gobierno para clarificar su posición sobre la política DADT en *Log Cabin Republicans v. United States*, 2011 WL 2683238 (9th Cir., July 11, 2011), pues el 12 de octubre un tribunal de distrito de California había juzgado incons-

titucional esa política del ejército. De modo que la ley se hizo efectiva a partir del 20 de septiembre de este año. Como era de esperar, el proyecto suscitó un gran debate social, por las implicaciones que podría tener en las ceremonias de unión o matrimonio entre personas del mismo sexo, bajo la *Defense of Marriage Act* (DOMA) de 1996 (una de cuyas secciones –la 3ª que define el matrimonio como unión entre hombre y mujer, y los esposos como personas de distinto sexo– no volverá a ser defendida por la administración Obama)⁵, así como por el juicio moral que pudiera recibir la conducta homosexual. En particular, los capellanes militares, con el respaldo del arzobispo católico castrense, Timothy Broglio, reaccionaron frente a la propuesta, por temer que se vería afectada su libertad de conciencia. Y, también en relación a esta cuestión, la Cámara de Representantes votó a primeros de julio del 2011 una enmienda a la *Defense Appropriations Bill* de 2012 a fin de evitar el desvío de fondos federales para celebrar bodas entre personas del mismo sexo dentro de las bases militares. Al mismo tiempo, en el mes de marzo, congresistas demócratas en las dos Cámaras introdujeron un proyecto de ley (*Respect for Marriage Act*, HR 1116 y S 598) a fin de derogar la DOMA y reconocer federalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados válidamente en los Estados que los reconozcan. El proyecto fue introducido después que el portavoz republicano de la Cámara de Representantes John Boehner anunciara el 9 de marzo que esa Cámara iniciaría la defensa legal de la DOMA.

Por otra parte, tras los ataques y persecución sufrida por los cristianos en países como Afganistán, Pakistán, Irak o India, el congresista republicano por Virginia Frank Wolf introdujo en la Cámara el 25 de enero un proyecto de ley (HR 440, *Special Envoy to Promote Religious Freedom of Religious Minorities in the Near East and South Central Asia*) con el respaldo de 80 congresistas demócratas y republicanos que, como su nombre indica, pretende crear un enviado especial para las minorías religiosas en Oriente Próximo y Asia central. Una posición dentro del Departamento de Estado que debe recaer en alguien

⁵ Una de las últimas reacciones frente a esta decisión de la administración Obama ha llegado de parte de la Conferencia norteamericana de obispos católicos. Su presidente, el Cardenal arzobispo de New York Timothy M. Dolan le dirigió el 20 de septiembre a Obama una carta de 5 páginas defendiendo la DOMA y urgiendo a su administración a dejar de combatirla, un escrito que terminaba en los términos siguientes: «The Administration's failure to change course on this matter will, as the attached analysis indicates, precipitate a national conflict between Church and State of enormous proportions and to the detriment of both institutions. Thus, on behalf of my brother Bishops, I urge yet again that your Administration end its campaign against DOMA, the institution of marriage it protects, and religious freedom».

de reconocida valía en la defensa de los derechos humanos y, en concreto, de la libertad religiosa. También influyó en la presentación del proyecto el hecho que el puesto de *Ambassador-at-Large for International Religious Freedom* en el Departamento de Estado hubiera estado vacante durante los dos últimos años. Tras su introducción, el proyecto fue enviado a las tres siguientes comisiones de la Cámara: el comité *House Foreign Affairs* y los dos siguientes subcomités dependientes de este *House Foreign Affairs*, el *Subcommittee on Middle East and South Asia* y el *Subcommittee on Africa, Global Health, and Human Rights*. El 29 de julio del 2011 obtuvo el respaldo de la Cámara en una votación de 402 votos a favor frente a 22 en contra. Fue enviado entonces para su aprobación al Senado y posterior firma, en caso de salir adelante, por el presidente. Por último, el 12 de enero del 2011, el congresista republicano por California Duncan D. Hunter introdujo un proyecto de ley (HR 290, *War Memorial Protection Act*) para permitir símbolos religiosos en los monumentos militares (los *US Military Memorials*). La iniciativa fue enviada al comité de la Cámara *House Natural Resources* y al subcomité dependiente del anterior *Subcommittee on National Parks, Forests and Public Lands*. Estos recomendaron el paso a la Cámara para su votación. El proyecto vino como respuesta a la decisión del noveno circuito que juzgó contraria a la cláusula de no establecimiento la cruz presente en el *Mount Soledad Veterans Memorial*. Finalmente, una de las últimas intervenciones en la Cámara de Representantes tuvo lugar el 24 de junio del 2011 cuando un grupo de 10 congresistas presentaron una iniciativa legal (la *Religious and Parental Rights Defense Act* de 2011, HR 2400) a fin de impedir un referéndum propuesto en San Francisco que buscaba evitar la circuncisión masculina para menores de 18 años en la ciudad. Al tratarse de una cuestión de salud pública de competencia estatal y no municipal, un juzgado de la ciudad no permitió que fuera presentada esa cuestión a consulta popular. Sea como fuere, la medida presentada en Washington decía que «ningún Estado o subdivisión política del mismo podrá adoptar o forzar una ley, regulación u orden que prohíba o regule la circuncisión de varones menores de 18 años y cuyos padres o tutores la hubieran consentido, salvo que tal ley, regulación u orden, (1) se aplique a todas las circuncisiones realizadas en el Estado; y (2) se limite a asegurar que esas prácticas son realizadas de modo higiénico».

1.2.2. *Proyectos de ley y leyes estatales*

Pueden indicarse aquí una cuarentena de iniciativas legales presentadas en 26 de los 50 Estados de la Unión. En concreto, se trata de Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Ken-

tucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Washington. De entre estos Estados y en los meses aquí examinados, el de Arizona (con 7 proyectos) es el que ha mostrado mayor interés sobre el hecho religioso. La política escolar y la cuestión del matrimonio o de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, así como la garantía del derecho a la vida, han sido los asuntos más frecuentes que ahora presentamos en los siguientes diez apartados.

1.2.2.1. *Derecho al matrimonio y uniones civiles*

En relación al matrimonio y al *same-sex marriage*, las dos cámaras legislativas del Estado de California aprobaron en el mes de agosto del 2010 el texto de la *Civil Marriage Religious Freedom* (SB 906) que fue, sin embargo, vetado el 30 de septiembre por su gobernador, Arnold Schwarzenegger. La iniciativa legal pretendía proteger al clero que se opusiera a participar en una ceremonia contraria a su fe. La objeción del gobernador republicano de California respondía a la inclusión del término civil antes del de matrimonio en su definición dentro del *California Family Code*. Pero fue New York el Estado que ocupó el primer plano de la escena nacional e internacional cuando su Senado aprobó el 24 de junio de 2011 –en una reñida votación de 33 a 29, eso sí– el texto del proyecto titulado *Marriage Equality Act* (A 8354) que la Asamblea del Estado había aprobado ya el 16 de junio en votación de 80 a 63. Con esta nueva ley sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, el Estado de New York se convirtió en el sexto del país en autorizar esa clase de matrimonio. Como en otros casos, el texto de la ley admite objeción de conciencia por razones religiosas a las iglesias, organizaciones eclesiasísticas y sus ministros, a los que no se podrá penalizar por no querer asistir a esas ceremonias, pero nada se dice de personas particulares que por esas mismas razones religiosas se opongan a ese tipo de enlaces.

Por lo que se refiere a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, los Estados de Delaware, Illinois, Rhode Island y Hawaii sacaron adelante proyectos de ley en la materia, a diferencia de los planteados en Colorado y Maryland. Así Delaware autorizó uniones civiles entre personas del mismo sexo a través de la ley (SB 30) firmada por el gobernador demócrata de ese Estado Jack Markell el 11 de mayo del 2011. Con el proyecto se buscaba ofrecer a los contrayentes de una unión civil los mismos derechos que los esposos y, eso sí, garantizaba el derecho de los ministros de culto (no de los jueces de paz) a no participar en esas ceremonias. Por su parte, Illinois aprobó el 1 de diciembre del 2010 la *Illinois Religious Freedom Protection and Civil Union Act* con el voto

favorable de sus cámaras. En ella se regula la licencia para uniones civiles sean entre personas del mismo sexo o no y su sección 15 prevé también la excepción por razón de religión. Asimismo el Senado de Rhode Island respaldó un proyecto (HB 6103) sobre uniones civiles de personas del mismo sexo a finales de junio del 2011. La medida contempla exenciones por razón de la conciencia religiosa del ministro de culto o de su organización. Y en Hawaii su anterior gobernador, la republicana Linda Lingle, vetó el 6 de Julio de 2010 un proyecto de ley (HB 444) que hubiera dado a los contrayentes de uniones civiles del mismo y de distinto sexo iguales beneficios y responsabilidades que los casados. A su juicio este asunto de las uniones civiles debería ser sometido a los electores de Hawaii. El caso es que terminó en su cargo en diciembre de ese año y fue sustituida en el puesto por el gobernador demócrata Neil Abercrombie. Fue entonces cuando el 16 de febrero del 2011 el Senado de Hawaii aprobó, en una votación de 18 a 5, otro proyecto similar (SB 232) sobre uniones civiles en el Estado que envió al nuevo gobernador para su firma. En este caso no hubo veto y, según la nueva normativa, cualquier juez o ministro de culto puede tener licencia para celebrar esas uniones civiles pero no está obligado a hacerlo ni podrá ser castigado quien se oponga a ello. Desde entonces Hawaii pasó a ser el séptimo Estado en autorizar uniones civiles, que no matrimonios, entre personas del mismo sexo. Sin embargo, fracasó el intento de aprobación de una normativa sobre uniones civiles del mismo sexo (SB 172) en Colorado, gracias al voto en contra de seis republicanos del Comité Judicial de su Cámara baja a primeros de abril del 2011. Y en el caso de Maryland, su Cámara de Delegados devolvió el 11 de marzo de 2011 a su Comité un proyecto de ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, autorizándolo en el Estado pero sin exigírselo al clero que no deseara participar en esas ceremonias, que ya había sido aprobado por el Senado el 24 de febrero (*Civil Marriage Protection Act*, SB 116). La razón fue la falta de apoyo suficiente entre los demócratas ante la fuerte oposición de católicos e iglesias afroamericanas.

1.2.2.2. *Derecho a la vida e integridad física*

En el caso de la protección del derecho a la vida, dos Estados han intentado introducir una enmienda para proteger la vida humana desde su concepción. Es lo que sucedió sin éxito en el referéndum celebrado en Colorado el 2 de noviembre del 2010 para aprobar el texto de la *Personhood Amendment*. El 70 % de los votantes no dieron su respaldo a esta iniciativa pro vida. Mientras tanto, el Estado de Mississippi tiene prevista una consulta similar en noviembre del 2011, después de que un tribunal estatal de circuito primero y después su propio Tribunal Supremo fallaran a su favor en *Hughes v. Hosemann*, No. 251-10-546 (MS Cir. Ct., Oct. 26,

2010) y en *Hughes v. Hosemann*, 2011 WL 3925581 (MI Sup. Ct., Sept. 8, 2011). Como la de Colorado, la *Personhood Amendment* de Mississippi incluía en la definición de «persona» todo ser humano desde su concepción, enmienda que fue rechazada en la pasada votación del 8 de noviembre con el 58% de los votos en contra frente al 42% a favor. Y siguiendo con el movimiento pro vida, tras la pasada victoria de los republicanos en las cámaras estatales, se han presentado nada menos que 64 iniciativas en defensa de la vida y contrarias o restrictivas al aborto. Mientras el Estado de Virginia reguló las clínicas abortivas como si fueran hospitales, los Estados de Utah o Nebraska, entre otros, han querido evitar que los seguros de salud privados puedan llegar a cubrir abortos, salvo en ciertas excepciones. Parece que otros Estados como South Dakota quieren anteponer al aborto una primera visita de la mujer a un centro de orientación para recibir información sobre ello. Mientras tanto, como tuvimos ocasión de ver en la primera parte de nuestra crónica, el movimiento contrario *pro choice* sigue intentando hacerse presente incluso hasta en los centros de orientación familiar contrarios al aborto o a la contracepción y a los que se les quiere exigir por vía legal que ofrezcan cierta información.

Un caso singular puede ser incluido en el apartado de integridad física. Se trata de la iniciativa presentada el 17 de febrero del 2011 en la Asamblea de California para evitar la prohibición de la circuncisión masculina antes de los 18 años de edad. Con el respaldo de judíos y musulmanes, el proyecto (AB 768) sufrió enmiendas en la Asamblea durante los meses de marzo y abril, siendo corregido en el Senado el 7 de julio del 2011 en el Senado el 7 de julio del 2011 y aprobado finalmente en el mes de septiembre. El gobernador Jerry Brown lo firmó a primeros de octubre. De este modo se buscaba paralizar una serie de intentos locales dirigidos a prohibir esa práctica. En el caso de la ciudad de San Francisco incluso se quiso someter esta cuestión a referéndum en noviembre del 2011. De no habérselo impedido el tribunal superior de esa ciudad a finales de julio, ante una ley estatal que impedía a los municipios decidir sobre cuestiones sanitarias reservadas a regulación estatal, esta ciudad hubiera sido la primera en Estados Unidos en llevar a consulta popular este particular asunto.

1.2.2.3. Política migratoria

Durante los años 2010 y 2011, el Estado de Arizona ocupó las primeras páginas de la prensa nacional e internacional por su controvertida política migratoria, con repercusiones también en el orden religioso. Esa polémica ley sobre inmigración (*Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act*, SB 1070), firmada por su gobernadora republicana Jan Brewer el 23 de abril de 2010, entró en vigor el 29 de julio de 2010. Y ello pese a que, 24 horas antes, la jueza Susan Bolton, en Phoenix, ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la

norma que criminaliza la inmigración en *US v. State of Arizona and Janice K. Brewer*, 703 F.Supp.2d 980 (D AZ, July 28, 2010). Pero la historia no se detuvo aquí y el 11 de abril de 2011, a petición del presidente Obama, el noveno circuito confirmó la suspensión de las disposiciones más controvertidas de la ley en *US v. Arizona*, 641 F.3d 339 (9th Cir., April 11, 2011). Una medida de esta ley, la sección 13-2929, penalizaba a quien transportara a inmigrantes ilegales, algo que fue denunciado por diversas iglesias que dan ese servicio en autobuses o furgonetas para asistir a retiros o actividades espirituales. El caso es que este proyecto de Arizona estimuló a otros gobernadores como el de Alabama, el republicano Robert Bentley, que firmó una nueva ley estatal sobre inmigración ilegal (HB 56) el 9 de junio del 2011, pretendiendo entrar en vigor en el mes de septiembre. Una ley que también ha sido denunciada por líderes religiosos de las principales iglesias al considerar que representa una violación de su libre ejercicio de la religión, toda vez que pretende impedir la ayuda a extranjeros que necesiten comida, ropa, alojamiento y oración.

1.2.2.4. *Política escolar*

En el actual Estado cultural no debe extrañarnos que sea el campo educativo uno de los ámbitos de especial interés para los legislativos, sea en el terreno de la oración, de la financiación, de la discriminación escolar o de la objeción de conciencia ante ciertas exigencias como la preceptiva vacunación. En este sentido, se plantearon dos iniciativas interesantes durante este tiempo en Florida. Por un lado, este Estado aprobó un proyecto de ley (HB 31) con el que se pretendía evitar ciertos acuerdos en el ámbito escolar que pudieran contravenir los derechos de libertad religiosa garantizados en la Primera enmienda. Este proyecto –sancionado por las Cámaras de Florida el 22 y 29 de abril, firmado por el anterior gobernador republicano Charlie Crist el 4 de junio del 2010 y entrado en vigor el 1 de julio–, trataba de dar respuesta al caso de *Santa Rosa County School District* que vimos en la parte primera de esta memoria y al que nos remitimos⁶. Pues bien, según esta nueva ley, los distritos escolares no pueden actuar o llegar a un acuerdo que lesione derechos en ausencia de un expreso consentimiento dado por escrito del interesado. Por otra parte, el 6 de mayo del 2011, el Senado de Florida respaldó, en una votación de 26 a 10, la iniciativa HJR 1471 de su Cámara baja a fin de someter a referéndum la derogación de la enmienda Blaine de su Constitución (sección 3 de su artículo 1) por la que se prohíbe cualquier ayuda financiera a un centro o institución religiosa. Es interesante comprobar cómo, en

⁶ Cfr. J. I. Rubio López, *Crónica anual...*, cit., 745.

su exposición de motivos, el legislador lamenta la inspiración anticatólica (dice en concreto «el lenguaje de la Enmienda Blaine de Florida surgió en una atmósfera de, y existe como resultado de, un ánimo y una intolerancia anticatólica») de esa enmienda que impidió la asistencia económica de hospitales, escuelas o centros de adopción de carácter religioso. Y así el proyecto pretende corregir la situación en los términos siguientes: «Dejando a salvo la Primera enmienda, ni el gobierno ni algún agente suyo podrá negar a un individuo o entidad los beneficios de algún programa, asistencia financiera o algún otro tipo de ayuda sobre la base de su identidad religiosa o creencia». Siguiendo con las ayudas económicas, el Estado de Indiana aprobó una ley, el *Bill for an Act to amend the Indiana Code concerning education* (HB 1003), en vigor desde el 1 de julio, con la que se pretende autorizar un programa de becas escolares de aquellos alumnos cuyos ingresos familiares no excedieran el 150% de la cuantía necesaria para poder optar al programa federal de almuerzo subvencionado o gratuito. Este texto legal también prevé deducciones fiscales para las familias de los alumnos enviados a centros privados o en régimen de *homeschooling*. Se exige que los centros tengan un conjunto de documentos de la historia americana sin censura por sus referencias religiosas, siendo posible su empleo en el trabajo escolar.

En el caso de Virginia, su Cámara de Representantes aprobó dos enmiendas el 1 de febrero del 2011, una sobre oración y otra sobre financiación de estudios. La primera de ellas (HJ 593) fue aprobada en votación de 61 frente a 33 con una abstención y garantizaba el derecho del pueblo de Virginia a rezar y a reconocer sus creencias religiosas, herencia y tradiciones en lugares de titularidad pública, incluyendo las escuelas públicas. La segunda (HJ 614), aprobada en votación de 62 a 32 con una abstención, autorizaba al legislativo estatal a ofrecer préstamos y subvenciones a los estudiantes que asistieran a escuelas teológicas y seminarios en Virginia si el estudiante fuera un candidato aprobado para el oficio de capellán en alguna de las ramas del ejército incluyendo la Guardia Nacional.

La discriminación religiosa en la escuela ha ocupado también la atención del legislador en tres Estados. El de Arizona adoptó una medida que tuvo por objeto los derechos de creencia y expresión religiosa de sus estudiantes universitarios. La medida buscaba prohibir cualquier trato discriminatorio por las creencias de sus alumnos en las Universidades y *Community Colleges* del Estado. Su Senado respaldó el 23 de marzo de 2011 el proyecto que su cámara baja había aprobado a primeros de ese mes (HB 2565)⁷. Por su parte, seis

⁷ Medida interesante que protege las creencias religiosas del alumno a las que podrá recurrir sin verse por ello penalizado o beneficiado. Cuando el programa universitario prevea asistencia clínica o consejería, el estudiante podrá hacer valer una objeción religiosa para no

miembros de la Cámara de Representantes de Kentucky introdujeron el 7 de febrero del 2011 un proyecto (*An Act relating to school safety*, HB 370) a fin de regular la disciplina en la escuela prohibiendo la práctica del acoso escolar directo o por internet (*bullying* y *cyberbullying*) según raza, origen nacional, etnia, orientación sexual, género, discapacidad, religión y expresión. Más adelante hubo quien introdujo una enmienda para proteger el discurso anti-gay, religiosamente motivado, siempre que no entrañara ningún daño. Y, finalmente, el gobernador demócrata David Paterson del vecino Estado de New York firmó una ley el 8 de septiembre de 2010, aunque no tendrá efecto hasta el 1 de julio del 2012, para penalizar el acoso escolar y la discriminación, no solo por la orientación sexual de los alumnos, punto en el que más presión ejercieron los grupos en defensa de los derechos de los gays, sino también por razón religiosa en las escuelas de su Estado. Se trataba de la iniciativa *Dignity for All Students Act* (S 1987B) que había sido aprobada en el Senado el 22 de junio en votación 58 a 3. Al hacerlo así, New York se convirtió en el 43 Estado de la Unión con una normativa específica contra la discriminación escolar.

Por último, el asunto de la objeción de conciencia ante la exigencia de vacunación en las escuelas también ocupó a otros dos Estados. En primer lugar, la Asamblea General de New Jersey introdujo el 22 de noviembre de 2010 una propuesta legislativa (ACR 157) para incluir nuevos límites sobre exenciones religiosas permitidas ante las exigencias de vacunación en las escuelas. Según el texto del proyecto, los padres o tutores de los estudiantes deberán ofrecer, si desean verse exentos de la vacuna, una declaración escrita explicando cómo su administración entra en conflicto con mandatos o prácticas religiosas mantenidas de buena fe por el estudiante o por ellos mismos. Y, en segundo lugar, el Estado de Washington presentó en febrero de 2011 una propuesta legislativa en términos muy similares. Siendo el objetivo el mismo, establecer nuevos límites sobre las exenciones religiosas que se pretendan hacer valer frente a las exigencias de vacunación, el proyecto washingtoniano (SB 5005) exigía que la solicitud de esa clase de exenciones, por razones religiosas, filosóficas o médicas, incluyera una declaración por un facultativo que el padre o tutor había sido informado de los be-

atender a una determinada persona. Al mismo tiempo, las universidades no pueden oponerse al reconocimiento de grupos estudiantiles por el contenido de su discurso, sea religioso, político o filosófico, incluyendo el culto. Asimismo, los grupos políticos o religiosos de estudiantes podrán elegir a sus líderes, establecer las condiciones de su pertenencia, resolver controversias o gestionar sus propios asuntos internos. Y estos estudiantes podrán hablar o distribuir folletos en foros públicos salvo que la Universidad tuviera un interés poderoso en regular esa expresión.

neficios y riesgos de la vacunación. Y al mismo tiempo también se pedía una declaración escrita de padres o tutores acerca del conflicto que esa práctica entrañaba para sus creencias sinceramente sostenidas.

1.2.2.5. *Iglesias y lugares de culto*

Las circunstancias especiales de estos lugares han provocado la intervención de los Estados por razones diversas. Así, por ejemplo, el Senado de Arizona aprobó un proyecto (SB 1282) en marzo del 2011 por el que las asambleas e instituciones religiosas quedarían exentas de registrarse como comités políticos siempre, eso sí, que no emplearan una parte sustancial de su tiempo o ingresos a influir en las iniciativas legislativas o de referéndum o enmienda constitucional. Y en este mismo Estado, su gobernadora Brewer firmó el 11 de enero de 2011 una ley (SB 1101) que el Senado había aprobado en materia de orden público con el fin de evitar protestas dentro de un radio de 300 pies (unos 90 metros) del lugar en el que se celebre un funeral, en el tiempo comprendido entre una hora antes y una hora después de la ceremonia. Esta iniciativa fue adoptada como una medida urgente que buscaba paralizar a la Westboro Baptist Church of Topeka (Kansas) de manifestarse en los funerales de las seis víctimas por disparos efectuados contra la representante demócrata Gabrielle Giffords. Pero, también como una medida de orden público, el Senado de Michigan aprobó en febrero del 2011 un proyecto de ley (SB 19) que incrementaba, sin muchas precisiones, las penas sufridas (cárcel de hasta 93 días, multa de mil dólares o cien horas de servicio comunitario) a quien interrumpiera o alterara los servicios mantenidos en algún edificio identificado claramente para su uso religioso.

Aunque para muchos una iglesia no sea el lugar más indicado para llevar armas, la Segunda enmienda norteamericana protege este derecho fundamental sobre el que se fue construyendo la nación. Dos Estados han regulado la tenencia de armas en las iglesias, uno para prohibirlas y otro para permitir las. En este sentido, el 4 de junio del 2010 el gobernador de Georgia firmó un proyecto de ley (SB 308) que impedía las armas en las iglesias, algo que afectaba al derecho reconocido en la Segunda enmienda, derecho que fue respaldado más tarde por la sentencia del Supremo en *McDonald v. City of Chicago* (28 junio 2010). Sin embargo, el Estado de Louisiana, a diferencia del anterior, aprobó el 6 de julio de 2010 con la firma de su gobernador republicano Bobby Jindal una ley (HB 1272) que rechazaba la prohibición absoluta de llevar armas en iglesias y otros lugares de culto. Lo que buscaba era regular este asunto, dando permiso a las congregaciones para autorizar a quienes podían llevar armas en Iglesias, sinagogas o mezquitas. Eso sí el solicitante debía poder demostrar un entrenamiento táctico de 8 horas y la autoridad del lugar debía in-

formar de este hecho a la congregación, de modo que todos los miembros supieran que otros podían estar armados dentro.

1.2.2.6. *Venta de alcohol en domingo y alimentos Kosher*

El Estado de Arizona eliminó el 6 de mayo del 2010 los últimos límites a la venta de alcohol en domingo. Desde el momento en el que su gobernadora Brewer firmó el proyecto HB 2143 se suprimía la prohibición de venta de alcohol antes de las 10 de la mañana y desde finales de julio, fecha de entrada en vigor de la ley, las ventas de licor no sufrían distinción por ser domingo, comenzando como el resto de los días desde las 6 de la mañana. Pero Arizona no fue el único Estado interesado en esta cuestión. A principios del 2011 se supo que grupos religiosos estaban presionando a los republicanos en el Senado de Georgia para no respaldar un proyecto que permitiría someter a referéndum local la venta en domingo de bebidas alcohólicas en tiendas al por menor. Y es que mientras el anterior gobernador Perdue aseguró que vetaría esa normativa, el nuevo gobernador republicano Nathan Deal prometió que la firmaría.

Por otra parte, el 20 de mayo de 2010 el anterior gobernador demócrata de Georgia, Sonny Perdue, firmó una ley (la *Georgia Kosher Food Consumer Protection Act*, HB 1345) a fin de revisar la normativa estatal sobre venta de comida Kosher. La anterior normativa exigía que esa clase de comida vendida como tal siguiera todas las reglas y exigencias religiosas de los judíos ortodoxos. Todo comenzó cuando un rabino quiso certificar su comida como Kosher pero sin seguir aquellos criterios, introduciendo así la *American Civil Liberties Union* (ACLU) una denuncia contra la normativa anterior. Ahora esto es posible, aunque con criterios que aseguren el carácter propio de esa clase de comida.

1.2.2.7. *Símbolos religiosos*

El 17 de junio de 2011 el gobernador republicano de Texas Rick Perry firmó una ley (HB 1278) aprobada por sus dos cámaras legislativas en el mes de mayo y por la que se prohíbe a los propietarios de condominios aprobar acuerdos restrictivos a fin de impedir que los vecinos fijen sobre sus puertas objetos religiosos como la mezuzá judía (pequeña caja que contiene un pergamino con versículos de la Torá en su interior y que los judíos colocan en la parte derecha de la jamba de sus puertas como protección del hogar). Lo que sí pueden es prohibir y retirar aquellos que contengan lenguaje o imágenes claramente ofensivos o contrarios a la salud y seguridad públicas. Con anterioridad, el Estado de Illinois había procedido a regular la cuestión tras la controversia que vimos en la primera parte de esta crónica (*Shoreline Towers*

Condominium Association v. Gassman, 404 Ill. App. 3d 1013, 936 N.E.2d 1198 [Ill. App., Sept. 30, 2010])⁸.

1.2.2.8. *Legislación anti-Sharia*

En el Estado de Oklahoma sus ciudadanos fueron convocados en referéndum el 2 de noviembre de 2010 a fin de aprobar la llamada *State Question No. 755* por la que se buscaba corregir la Constitución estatal para prohibir que los tribunales estatales consideraran o usaran el derecho internacional o la Sharia (cuerpo normativo del mundo musulmán que comprende su propia doctrina jurídico-religioso-política, algo que inspira su legislación y que incluye –entre otras cosas– la yihad o guerra santa) cuando decidieran los casos ante ellos. El 70% votó a favor de la medida. Por su parte, en las cámaras legislativas de Tennessee fue introducido en febrero del 2011 uno de los textos (HB 1353 y SB 1028) más elaborados de legislación anti-Sharia en el contexto de lucha contra el terrorismo. El proyecto de ley buscaba prohibir todo tipo de apoyo material a cualquier organización a la que el *Attorney General* del Estado hubiera designado previamente como una organización que postulara, defendiera o sostuviera la necesidad de la Sharia.

1.2.2.9. *Libertad religiosa de trabajadores y funcionarios*

En febrero de 2011 fue introducido en la cámara legislativa de Tennessee el proyecto HB 331 bajo el título de *Equal Access to Local Government Contracts and Services Act*. Una medida dirigida a evitar la discriminación en el empleo por razón de la raza, credo, color, religión, sexo, edad u origen nacional del trabajador. Por otra parte, una iniciativa de Arizona (SB 1288) recibió el veto de su gobernadora Brewer el 11 de abril del 2011. Se trataba de un proyecto que había sido aprobado en marzo por el Senado con el fin de asegurar que el gobierno no denegaría, suspendería o revocaría una licencia u ocupación profesional, certificado o registro de cargos públicos por razón de las creencias religiosas del interesado. Con su oposición, la gobernadora de Arizona quería evitar una especie de inmunidad que impidiera la suspensión del cargo de policías para aquellos que o bien practicarán la poligamia según la *Fundamentalist Latter Day Saints* (FLDS), o bien rehusaran ofrecer información de su líder Warren Jeffs, actualmente condenado a cadena perpetua por abuso de menores.

⁸ Cfr. J. I. RUBIO LÓPEZ, *Crónica anual...*, cit., 752-753.

1.2.2.10. *Protección general del derecho de libertad religiosa y otros casos*

El Estado de Louisiana aprobó la *Preservation of Religious Freedom Act* de 2010 (SB 606) que, introducida el 29 de marzo, fue respaldada el 21 de junio por sus dos Cámaras, firmada por su Gobernador Jindal el 30 de junio y que entró en vigor el 15 de agosto de 2010. En el marco de la doctrina *Sherbert*, esta normativa exige que todo gobierno estatal y local debe acudir a un poderoso interés (*compelling interest*) y usar la medida menos restrictiva (*least restrictive means*) antes de limitar sustancialmente el ejercicio religioso de alguien, incluso aunque responda a una regla aparentemente neutral o de general aplicabilidad (es decir, en contra de las tesis de *Smith* y dentro de la esfera de la RFRA y RLUIPA). Representa así el último intento legislativo de un Estado de restablecer el criterio del examen estricto de intereses que *Sherbert* sancionó y que *Smith* corrigió. Pero Louisiana no fue el único Estado que intentó reforzar la garantía estatal de la libertad religiosa. En este sentido, se ha propuesto en el Estado de North Dakota para el mes de junio del año 2012 un referéndum sobre una enmienda relativa al derecho de libertad religiosa. En el texto que se presenta a votación se dice que el gobierno no puede limitar ese derecho de una organización o de una persona, un derecho consistente en actuar o no según una creencia religiosa mantenida sinceramente que no puede ser limitada salvo que el gobierno pruebe la existencia de un poderoso interés para ello y busque la medida menos restrictiva. En la comprensión de la ley, hablar de límites supone también cortapisas indirectas tales como privación de beneficios, imposición de cargas o exclusión de programas o de acceso a instalaciones. Y el legislativo de Missouri también aprobó una propuesta (HJR2), en los meses de marzo y mayo de este año del 2011, de enmienda constitucional a fin de ampliar, en términos muy generosos, la garantía de libertad religiosa reconocida en la sección 5 de su artículo I. Como toda enmienda de esas características deberá someterse a consulta popular o referéndum en el mes de noviembre del 2012. Según se indica, se trataría de asegurar el derecho de todo ciudadano de Missouri a expresar sus creencias religiosas, de todo niño en edad escolar a rezar y reconocer a Dios voluntariamente en sus escuelas y que todas las escuelas públicas tendrán expuesto el *Bill of Rights* de la Constitución norteamericana.

Además de esas iniciativas de carácter general, también se han producido otras sectoriales en la misma dirección de defensa del libre ejercicio de la religión. Es el caso del proyecto HB 2596 de Arizona, convertido en ley tras la firma por su gobernadora el 11 de mayo de 2010. Con esta medida se buscaba reforzar el derecho estatal al uso del suelo por instituciones religiosas⁹ que, como es sabido,

⁹ La medida aprobada impide cualquier ordenanza urbana que imponga un límite no razonable sobre el libre ejercicio de la religión, y esto incluso aunque el gobierno tuviera un poderoso

ya estaba garantizado federal y estatalmente por la RLUIPA del 2000. Pero también es el caso de esta otra medida firmada el 15 de agosto de 2011 por el gobernador de Illinois. Se trata de la enmienda (HB 1484) a la *Illinois Identification Card Act* que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Supone una excepción a la regulación general que exige de la correspondiente fotografía, como medio de identificación, a quienes sus creencias religiosas (como, por ejemplo, los Amish) les impidan ser fotografiados, siendo la Secretaría de Estado la que determinará quienes pueden acogerse a la exención.

1.3. *Novedades bibliográficas: libros, artículos y simposios*

En el capítulo de libros recientemente publicados sobre libertad religiosa en Estados Unidos destacan los dos volúmenes del profesor Douglas Laycock, verdadero referente de la lucha en defensa de la cláusula de libre ejercicio durante la década crucial de los años 90 del siglo pasado y actual profesor en la Facultad de Derecho de la UVA (*University of Virginia*). Los dos han sido publicados por la Wm. B. Eerdmans Publishing Company en Grand Rapids, Michigan, el primero en 2010 y el segundo al año siguiente. Y los dos pertenecen a una colección de libros sobre derecho y religión organizada por la Universidad de Emory y dirigida por su editor general John Witte, Jr. quien hace la presentación del primero de esos dos libros. De hecho, están previstos otros dos volúmenes más de Laycock (el tercero examinará la protección de la legislación estatal y federal sobre libertad religiosa, y el cuarto y último comprenderá las cláusulas de *free speech* y de *non-establishment*, examinando la cuestión de la libertad de expresión en asuntos religiosos, del discurso del gobierno sobre religión y de la financiación pública de las instituciones religiosas). Pues bien, el primer volumen del 2010 recoge, bajo el título de *Religious Liberty. Vol. 1: Overviews and History* y en 888 páginas, una colección de artículos suyos publicados en las principales revistas de derecho de Estados Unidos, colaboraciones en distintas obras y otros escritos del autor entre los años 1985 y 2009. El libro está dividido en dos partes. La primera lleva por título

interés (*compelling interest*), salvo –eso sí– que esa actividad religiosa violara los criterios neutrales que existieran en el momento de su solicitud, supusiera un peligro o gran molestia sobre la propiedad adyacente o fuera posible una localización alternativa. También prohíbe la exclusión, discriminación o trato distinto entre instituciones religiosas, y ello aún cuando el gobierno tuviera ese interés poderoso. Finalmente, la normativa permite también a las ciudades eximir, en cada caso, a las iglesias o escuelas de las restricciones legales existentes sobre su localización cerca de negocios de venta de alcohol, si se encuentran en un distrito de esparcimiento.

Overviews (introducción o visión general) y en ella distingue lo que él mismo llama «Normative» y «Analytic and Descriptive» *Overviews*. Asimismo incluye la recensión de tres libros: los de John T. Noonan, Jr. (*The Believer and the Powers That Are* de 1987), Mark V. Tushnet (*Red, White, and Blue: A Critical Analysis of Constitutional Law* de 1988) y Jesse H. Choper (*Securing Religious Liberty: Principles for Judicial Interpretation of the Religion Clauses* de 1995). Y también comentarios de Laycock sobre designaciones judiciales, con especial referencia a lo sucedido con la de Robert Bork en 1987 y a la elección de Michael McConnell en el 2002 como juez federal para el décimo circuito. La segunda parte de este libro se dedica ya a la historia con una atención particular a la cuestión del *original intent*. Por su parte, el segundo volumen que acaba de salir este año de 2011 lleva por título *Religious Liberty. Vol. 2: Free Exercise Clause* y en otras 800 páginas divide la cuestión en tres grandes partes (*Regulatory Exemptions Under the Constitution, The Right to Church Autonomy* y, finalmente, *The Rights of Non-Mainstream Religions*). Bajo el primer epígrafe estudia principalmente los casos de *Smith* y *Lukumi*, en el segundo apartado analiza aspectos referidos al mundo del trabajo cuando los empleadores son entidades religiosas, al de las universidades y *colleges* religiosos, así como los derechos de los consejeros religiosos y el duro problema de los abusos sexuales, y finalmente, en la parte final del libro, Laycock aborda la cuestión del tratamiento jurídico de religiones minoritarias. En cada uno de estos apartados el autor vuelve a echar mano de artículos y de escritos suyos presentados en casos muy diversos desde 1979 hasta 2009. Esto hace que los dos primeros volúmenes aparecidos, de los cuatro previstos, representen un auténtico legado en defensa del libre ejercicio de la religión por uno de sus principales agentes en la academia y en el foro.

Entre otros libros aparecidos en este tiempo sobre cuestiones relativas al derecho de libertad religiosa en Estados Unidos queremos destacar, por razones diversas, los siguientes publicados en el año 2010¹⁰: Steven K. Green, *The Second Disestablishment: Church and State in Nineteenth Century America*, Oxford University Press, New York 2010, 462 pp.; Douglas F. Johnson, *Freedom of Religion: Locke v. Davey and State Blaine Amendments*, LFB Scholarly Pub., El Paso (Texas) 2010, 219 pp.; Sarah Barringer Gordon, *The Spirit of the Law: Religious*

¹⁰ Una selección de libros y artículos publicados en los años 2010 y 2011 los ofrece la sección de derecho y religión de la AALS (*Association of American Law Schools*) www.aals.org. Algunos de esos escritos, no todos, que aquí indicamos figuran en ese elenco. Por otra parte, unos y otros son referidos aquí no según el sistema norteamericano de cita sino conforme a los criterios de la revista *Ius Canonicum*.

Voices and the Constitution in Modern America, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2010, 316 pp.; Natalie Goldstein, *Religion and the State*, Facts On File, New York 2010, 384 pp.; Jennifer Jacobs Henderson, *Defending the Good News: The Jehovah's Witnesses' Plan to Expand the First Amendment*, Marquette Books LLC, Spokane (Washington) 2010, 172 pp.; John A. Ragosta, *Wellspring of Liberty: How Virginia's Religious Dissenters Helped Win the American Revolution and Secured Religious Liberty*, Oxford University Press, New York 2010, 261 pp.; Daniel Williams, *God's Own Party: The Making of the Christian Right*, Oxford University Press, New York 2010, 372 pp.; Jeff Sharlet, *C Street: The Fundamentalist Threat to American Democracy*, Little, Brown & Co., New York 2010, 344 pp.; S.E. Cupp, *Losing Our Religion: The Liberal Media's Attack on Christianity*, Threshold Editions, New York 2010, 269 pp.; Elaine Howard Ecklund, *Science vs. Religion: What Scientists Really Think*, Oxford University Press, New York 2010, 228 pp. Y si pasamos ahora al año 2011, nos resultan de interés los siguientes: John D. Wilsey, *One Nation Under God*, Pickwick Publications, Eugene (Oregon) 2011, 226 pp.; John M. Finnis, *Religion and Public Reasons*, Oxford University Press, New York 2011, 421 pp.; Paul Horwitz, *The Agnostic Age: Law, Religion and the Constitution*, Oxford University Press, New York 2011, 316 pp.; Thomas Albert Howard, *God and the Atlantic: America, Europe, and the Religious Divide*, Oxford University Press, New York 2011, 256 pp.; Paul Razor and Richard E. Bond (eds.), *From Jamestown to Jefferson: The Evolution of Religious Freedom in Virginia*, University of Virginia Press, Charlottesville (Virginia) 2011, 203 pp.; o la tercera edición del libro de Witte de 2005, ahora con Joel Nichols, John Witte, Jr. & Joel Nichols, *Religion and the American Constitutional Experiment*, Third Edition, Westview Press, Boulder (Colorado) 2011, 353 pp. Finalmente, la Carolina Academic Press publicó este año 2011 un manual sobre derecho constitucional a cargo de los profesores Sarah E. Ricks de la *Rutgers School of Law* y Evelyn Tenenbaum de la *Albany Law School* bajo el título *Current Issues in Constitutional Litigations: A Context and Practice Casebook* en el que se dedica un capítulo entero, el decimo-cuarto, de 60 páginas a la aplicación de la RLUIPA en el contexto penitenciario: E.M. Tenenbaum *Protecting Freedom of Religion in Prison: The Free Exercise Clause and RLUIPA*.

En otro orden de cosas, pero de gran trascendencia al suponer la suya una de las reflexiones más agudas sobre la religión y la libertad en nuestros días, es imprescindible aludir aquí a los dos últimos libros del profesor Charles Taylor. A principios de 2011 aparecía su libro *Dilemmas and Connections* que publicaba la Harvard University Press y que debe ser leído con su *A Secular Age* (2007) al retomar alguno de sus temas. En efecto, el libro

está dividido en tres partes: la primera dedicada a lo que llama *Allies and Interlocutors* (un recorrido por diversos pensadores comenzando por la filosofía moral de Irish Murdoch), la segunda dedicada a la *Social Theory* (abordando aspectos como los derechos humanos, el nacionalismo o los movimientos religiosos) y, finalmente, la tercera como *Themes from A Secular Age* (con argumentos como el secularismo, la modernidad católica o lo que define como peligros del moralismo). Igualmente importante es la traducción al inglés, prevista para octubre del 2011 por la misma Harvard University Press, bajo el título de *Secularism and Freedom of Conscience*, del texto que publicara en febrero del 2010, con el profesor agregado de filosofía de la Universidad de Laval (Quebec, Canada) Jocelyn Maclure, como *Laïcité et liberté de conscience* por la editorial canadiense Éditions du Boréal. De este último está prevista una traducción española por Anaya. Se trata de un libro pequeño de apenas 150 páginas, fruto de la participación de los dos autores en la comisión de consulta creada por el gobierno de Quebec en 2007 sobre las prácticas de adaptación a las diferencias culturales dividido en dos partes (laicidad y libertad de conciencia) con once capítulos interesantes sobre el concepto de laicidad, el espacio público y el privado, los signos o símbolos religiosos o la libertad de religión.

En el apartado de artículos publicados durante este año 2010-2011 y entre las revistas que han dedicado alguno de sus números a este asunto de la libertad religiosa, el volumen 32 de la *Cardozo Law Review* (2011) recoge las intervenciones tenidas (entre otros, de profesores como William Marshall o Marci Hamilton) en un congreso organizado por su facultad de derecho a los veinte años de la sentencia del Supremo en *Smith* (1990). También la *George Washington International Law Review* dedicó su número 41 (2010) a la cuestión relativa a la religión civil en Estados Unidos y en Europa, con artículos de Silvio Ferrari y de Andrew Koppelman. Asimismo, la *Oklahoma Law Review* en su volumen 63 (2010) recogió el encuentro habido sobre símbolos religiosos con escritos de Peter Irons y Thomas C. Berg. Y el número 3 del volumen 55 de la *South Dakota Law Review* (2010) publicó las ponencias del simposio celebrado en su facultad en el aniversario de la decisión *Smith*. A partir de aquí recogemos a pie de página los artículos que nos parecen de mayor interés por el argumento o su autor. Su elevado número nos advierte por sí mismo de la extraordinaria importancia que tiene esta cuestión para la doctrina norteamericana. Y siguiendo de cerca estos escritos podremos identificar sus principales líneas de investigación. En este sentido, podría detectarse primero un gran apartado dedicado a la cuestión de la religión o de la conciencia, del laicismo o del secularismo, del hecho religioso y sus implicaciones políticas (con aspectos sociales como la universidad, los *same-sex marriages* o la situación de los musulmanes tras

el 11 de septiembre) o de la Constitución¹¹. Si pasamos ahora a las cláusulas religiosas de la Primera enmienda, se han publicado estudios aislados, o bien sobre la

¹¹ Entre ellos han aparecido en este tiempo los siguientes: K. GREENAWALT, *The Significance of Conscience*, San Diego Law Review 47 (2010) 901 y ss.; S.D. SMITH, *Response to Professor Kent Greenawalt's Lecture*, San Diego Law Review 47 (2010) 1157 y ss.; L. ALEXANDER, *Response to Professor Kent Greenawalt's Lecture*, San Diego Law Review 47 (2010) 1153 y ss.; L. ALEXANDER & S.D. SMITH, *Freedom of Conscience: Stranger in a Secular Land*, San Diego Law Review 47 (2010) 899 y ss.; J. R. CHAPA, *Stripped of Meaning: The Supreme Court and the Government as Educator*, Brigham Young University Education & Law Journal 2011 (2011) 127 y ss.; S. D. SMITH, *The Constitution and the Goods of Religion*, San Diego Legal Studies Paper 10-059 (2011); ÍD., *The Paralyzing Paradox of Religious Neutrality*, San Diego Legal Studies Paper 11-060 (2011); ÍD., *Freedom of Religion or Freedom of the Church?*, San Diego Legal Studies Paper 11-061 (2011); ÍD., *The Plight of the Secular Paradigm*, San Diego Legal Studies Paper, 11-062 (2011); S.K. GREEN, *Understanding the Christian Nation Myth*, Cardozo Law Review de Novo 2010 (2010) 245 y ss.; J.O. ELORZA, *Secularism and the Constitution: Can Government Be Too Secular?*, University of Pittsburgh Law Review 72 (2010) 53 y ss.; B. LEDWITZ, *The New New Secularism and the End of the Law of Separation of Church and State*, Buffalo Public Interest Law Journal 28 (2009-2010) 1 y ss.; L. SCOTT SMITH, *The Secularization of America's Public Culture: Jews and the Establishment clause*, University La Verne Law Review 32 (2011) 257 y ss.; I.T. BENSON, *That False Struggle between Believers and Non-Believers*, Oasis 12 (2010); D.O. CONKLE, *Religious Truth, Pluralism, and Secularization: The Shaking Foundations of American Religious Liberty*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1755 y ss.; B. LEDWITZ, *The New Secularism and the End of the Law of Separation of Church and State*, Buffalo Public Interest Law Journal 28 (2009-2010) 1 y ss.; P. ANNICCHINO, *Laicite as Civil Religion: An Italian American Perspective*, George Washington International Law Review 41 (2010) 817 y ss.; CH.D. ANDERSON, *A Quest for Fair and Balanced: The Supreme Court, State Courts, and the Future of Same-Sex Marriage Review after Perry*, Duke Law Journal 60 (2011) 1413 y ss.; R. SCHRAGGER, *The Politics of Free Exercise After Employment Division v. Smith: Same-Sex Marriage, the War on Terror, and Religious Freedom*, Cardozo Law Review 32 (2011) 2009 y ss.; A.E. BROWNSTEIN, *Gays, Jews, and Other Strangers in a Strange Land: The Case for Reciprocal Accommodation of Religious Liberty and the Right of Same-Sex Couples to Marry*, University of San Francisco Law Review 45 (2010) 389 y ss.; M. STRASSER, *DOMA and the Constitution*, Drake Law Review 58 (2010) 1011 y ss.; J. ROGERS, *The Defense of Marriage Act (DOMA) and California's Struggle with Same-Sex Marriage*, Regent University Law Review 23 (2010-2011) 97 y ss.; G. J. SIMSON, *Religion, Same-Sex Marriage, and the Defense of Marriage Act*, California Western International Law Journal 41 (2010) 35 y ss.; M. STRASSER, *On Same-Sex Marriage and Matters of Conscience*, William & Mary Journal of Women & Law 17 (2010) 1 y ss.; A.R. HACKING, *A New Dawn for Muslims: Asserting Their Civil Rights in Post-9/11 America*, St. Louis University Law Journal 54 (2010) 917 y ss.; A. Z. HUQ, *The Signaling Function of Religious Speech in Domestic Counterterrorism*, Texas Law Review 89 (2011) 833 y ss.; J. GARVEY, *Intellect and Virtue: The Idea of a Catholic University*, Catholic University Law Review 60 (2011) 563 y ss.; R.K. VISCHER, *When Is a Catholic Doing Legal Theory Doing Catholic Legal Theory?*, Seton Hall Law Review 40 (2010) 845 y ss.; W.E. THRO, *The Heart of the Constitutional Enterprise: Affirming Equality and Freedom in Public Education*,

necesaria relación entre ellas, o bien con un estudio conjunto de ambas¹², pero lo común ha seguido siendo su tratamiento separado. Y así, en relación a la *establishment clause*, hay artículos que la estudian en general¹³, otros se ocupan del *Lemon*

Brigham Young University Education and Law Journal 2011 (2011); J. SHULMAN, *Introduction to Who Owns the Soul of the Child?: Religious Parenting Rights and the Enfranchisement of the Child*, *Georgetown Public Law Research Paper* 11-20 (2011); R. J. ARAUJO, S.J., *John Courtney Murray, S.J.: A Citizen of Two Cities*, *Loyola University of Chicago Law Journal* (2010) i-xvii; K. GREENAWALT, *In Celebration of Steven Shiffrin's The Religious Left and Church-State Relations, Article, Reply & Response*, *Cornell Journal of Law & Public Policy* 19 (2010) 741 y ss.; B. MAYLER, *In Celebration of Steven Shiffrin's The Religious Left and Church-State Relations*, *Cornell Journal of Law & Public Policy* 19 (2010) 751 y ss.; S. H. SHIFFRIN, *In Celebration of Steven Shiffrin's The Religious Left and Church-State Relations*, *Cornell Journal of Law & Public Policy* 19 (2010) 761 y ss.; T. R. TYLER, S. SCHULHOFER & A.Z. HUO, *Legitimacy and Deterrence Effects in Counterterrorism Policing: A Study of Muslim Americans*, *Law & Society Review* 44 (2010) 365 y ss.; F. M. GEDICKS, *God of Our Fathers, Gods for Ourselves: Fundamentalism and Postmodern Belief*, *William & Mary Bill of Rights Journal* 18 (2010) 901 y ss.; ÍD., *Undoing Neutrality? From Church-State Separation to Judeo-Christian Tolerance*, *Willamette Law Review* 46 (2010) 691 y ss.; ÍD., *American Civil Religion: An Idea Whose Time is Past*, *George Washington International Law Review* 41 (2010) 891 y ss.; J. J. KNICELY & J.W. WHITEHEAD, *In God we Trust: The Judicial Establishment of American Civil Religion*, *Journal Marshall Law Review* 43 (2010) 869 y ss.; B. SCHARFFS, *Creation and Preservation in the Constitution of Civil Religion*, *George Washington International Law Review* 41 (2010) 985 y ss.; A. KOPPELMAN, *The New American Civil Religion: Lessons for Italy*, *George Washington International Law Review* 41 (2010) 861 y ss.; F. M. GEDICKS, *The Recurring Paradox of Groups in the Liberal State*, *Utah Law Review* 2010 (2010) 47 y ss.; G. V. BRADLEY, *We Hold These Truths and the Problem of Public Morality*, *Catholic Social Science Review* 16 (2011) 123 y ss.; R. W. GARNETT, *The Political (and Other) Safeguards of Religious Freedom*, *Cardozo Law Review* 32 (2011) 1815 y ss.; G. P. MAGARIAN, *Religious Argument, Free Speech Theory, and Democratic Dynamism*, *Notre Dame Law Review* 86 (2011) 119 y ss.; A. M. KOPPELMAN, *How Shall I Praise Thee? Brian Leiter on Respect for Religion*, *San Diego Law Review* 47 (2010) 961 y ss.; M. W. MCCONNELL, *The Federalist Society National Lawyers Convention 2009: Religion and Its Relation to Limited Government*, *Harvard Journal of Law and Public Policy* 33 (2010) 943 y ss.

¹² Cfr. A.E. BROWNSTEIN, *The Religion Clauses as Mutually Reinforcing Mandates: Why the Arguments for Rigorously Enforcing the Free Exercise Clause and Establishment Clause are Stronger When Both Clauses are Taken Seriously*, *Cardozo Law Review* 32 (2011) 1701 y ss.; E. CHERMERINSKY, *The Future of the First Amendment*, *Willamette Law Review* 46 (2010) 623 y ss.; K. GREENAWALT, *Fundamental Questions about the Religion Clauses: Reflections on Some Critiques*, *San Diego Law Review* 47 (2010) 1131 y ss.; o L.C. GRIFFIN, *Fighting the New Wars of Religion: The Need for a Tolerant First Amendment*, *Maine Law Review* 62 (2010) 23 y ss.

¹³ Cfr. P.N. LEDUC, *Christianity and the Framers: The True Intent of the Establishment Clause*, *Liberty University Law Review* 5 (2011) 201 y ss.; R. SCHRAGGER, *The Relative Irrelevance of the Establishment Clause*, *Texas Law Review* 89 (2011) 583 y ss.; L. J. SIRICO, JR., *Failed Constitutional Metaphors: The Wall of Separation and the Penumbra*, *University of Richmond*

*test*¹⁴, otros se detienen en el no establecimiento dentro del ámbito escolar, en el campo de las oraciones legislativas o ante a la doctrina de la abstención eclesiástica¹⁵.

Law Review 45 (2011) 459 y ss.; J.A. OSEID, *The Power of Metaphor: Thomas Jefferson's «Wall of Separation between Church & State»*, Journal of Association of Legal Writing Directors (J. ALWD), 7 (2010) 123 y ss.; P.L. ABRAMS, *The Reasonable Believer: Faith, Formalism, and Endorsement of Religion*, Lewis and Clark Law Review 14 (2010) 1537 y ss.; R.G. WRIGHT, *Why a Coercion Test is of no use in Establishment Clause Cases*, Cumberland Law Review 41 (2010-2011) 193 y ss.; M. SCHWARTZMAN, *Conscience, Speech, and Money*, Virginia Law Review 97 (2011) 317 y ss.; S.D. SMITH, *Nonestablishment, Standing, and the Soft Constitution*, San Diego Legal Studies 10-045 (2010); J. MERRIAM, *Establishment Clause-Trophobia: Building a Framework for Escaping the Confines of Domestic Church-State Jurisprudence*, Columbia Human Rights Law Review 41(2010) 699 y ss.; C.H. ESBECK, *Uses and Abuses of Textualism and Originalism in Establishment Clause Interpretation*, Utah Law Review 2011 (2011); C.H. ESBECK, *Taxpayer Standing from Flast to Hein*, Mississippi Law Journal Online 80 (2010) 1 y ss.; A. ABRAMOWITZ, *A Remedy for Every Right: What Federal Courts Can Learn from California's Taxpayer Standing*, California Law Review 98 (2010) 1595 y ss.; F.M. GEDICKS, *Undoing Neutrality? From Church-State Separation to Judeo-Christian Tolerance*, Willamette Law Review 46 (2010) 691 y ss.; R. GULDMANN, *Beyond the Jurisprudence of Politeness: On the Relativity of Religious Neutrality* (July 20, 2010); C.M. CORBIN, *Ceremonial Deism and the Reasonable Religious Outsider*, University of California Los Angeles Law Review 57 (2010) 1545 y ss.; A.C. CARMELLA, *Exemptions and the Establishment Clause*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1731 y ss.

¹⁴ Cfr. A.J. ALEXANDER, *When Life Gives You the Lemon Test: An Overview of the Lemon Test and its Application*, Phoenix Law Review 3 (2010) 641 y ss.; J. BLACKMAN, *This Lemon Comes as a Lemon: The Lemon Test and the Pursuit of a Statute's Secular Purpose*, George Mason University Civil Rights Law Journal 20 (2010) 351 y ss.

¹⁵ Cfr. L. COOLEY, *Accommodating Diversity: Teaching about Religion in Public Schools*, Rutgers Journal Law & Religion 12 (2011) 347 y ss.; A.M. SEWELL, *Moving Beyond Monkeys: The Expansion and Relocation of the Religious Curriculum Debate*, Penn State Law Review 114 (2010) 1067 y ss.; G. SHREVE, *Religion, Science and the Secular State: Creationism in American Public Schools*, American Journal of Comparative Law 58 (2010) 51 y ss.; L.J. VIRELLI III, *Judging Darwin: Understanding the New Distributive Model of Evolution Instruction*, University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 13 (2010) 81 y ss.; D.D. BLOM, *Newdow v. Rio Linda Union School District: Religious Coercion in Public Schools Unconstitutional Despite Voluntary Nature of Partially Patriotic Activity*, Golden Gate University Law Review 41 (2011) 353 y ss.; S.D. SMITH, *Constitutional Divide: The Transformative Significance of the School Prayer Decisions*, Pepperdine Law Review 39 (2011) 945 y ss.; M.E. AZHAR, *Struggling Middle Class: Merit-Based Scholarships Meet School Vouchers*, Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy 24 (2010) 399 y ss.; C.B. WELTON II, *The Future of Locke v. Davey*, Virginia Law Review 96 (2010) 1453 y ss.; R.F. DUNCAN, *The «Clearest Command» of the Establishment Clause: Denominational Preferences, Religious Liberty, and Public Scholarships that Classify Religions*, South Dakota Law Review 390, 55 (2010) 390 y ss.; P.C. GREEN III & P.L. MORAN, *The State Constitutionality of Voucher Programs: Religion is Not the Sole Determinant*, Brigham Young University Education & Law Journal 2010 (2010) 275 y ss.; L. WANG, *Who Knows Best? The Appropriate Level of Judicial Scrutiny on Compulsory Education Laws Regarding Home*

Y lo que no han faltado tampoco han sido estudios sobre simbología religiosa con comentarios a las sentencias *Salazar v. Buono*, *Pleasant Grove City v. Summum*, o *American Atheists v. Duncan*¹⁶. En el caso de la cláusula de *free exercise*, algunos ar-

Schooling, *Journal of Civil Rights & Economic Development* 25 (2011) 413 y ss.; R. KREAGER JR., *Homeschooling: The Future of Education's Most Basic Institution*, *University of Toledo Law Review* 42 (2010) 227 y ss.; B. VAN BAREN, *The Wall Comes Tumbling Down: The Establishment Clause Collides with School Choice* (April 27, 2011); S.D. SMITH, *Constitutional Divide: The Transformative Significance of the School Prayer Decisions*, *San Diego Legal Studies Paper* 10-038 (2010); J.S. HENDRICKS & D.M. HOWERTON, *Teaching Values, Teaching Stereotypes: Sex Education and Indoctrination in Public Schools*, *University of Pennsylvania Journal Constitutional Law* 13 (2011) 587 y ss.; I. ATZET, *H. B. 189: Teaching Contraception in Utah's Abstinence-Only Public Schools*, *Journal of Law & Family Studies* 12 (2010) 273 y ss.; J. NATBONY, *Eleventh Annual Review of Gender and Sexuality Law: Educational Law Chapter: Sex Education in Schools*, *George Journal of Gender & Law* 11 (2010) 273 y ss.; A. LAI, *Tango or More? From California's Lesson 9 to the Constitutionality of a Gay-Friendly Curriculum in Public Elementary Schools*, *Michigan Journal of Gender & Law* 17 (2011) 315 y ss.; E.M. JAFFE & R.J. D'AGOSTINO, *Bullying in Public Schools: The Intersection Between the Student's Free Speech Rights and the School's Duty to Protect*, *Mercer Law Review* 62 (2011) 407 y ss.; L. JONES, *Straddling The Wall: Academic Freedom in Religious Universities and How Institutions May Engage in Judicious Self-Regulation*, *Review of Litigation* 30 (2011) 319 y ss.; C. S. KERR, *Teachers' Religious Garb as an Instrument for Globalization in Education*, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18 (2011) 539 y ss.; M. E. SWARTZ, *By Birth or by Choice? The Intersection of Racial and Religious Discrimination in School Admissions*, *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 13 (2010) 229 y ss.; J. R. LOFFLER, *God is not the Lunch-Lady: Accommodation of Religious Dietary Practices in Public Schools*, *Cardozo Law Review de Novo* 2010 (2010) 430 y ss.; CH.C. LUND, *Legislative Prayer and the Secret Costs of Religious Endorsements*, *Minnesota Law Review* 94 (2010) 972 y ss.; B. D. EASTBURN, *Hold that Line!: The Proper Establishment Clause Analysis for Military Public Prayers*, *Regent University Law Review* 22 (2009-10) 209 y ss.; J. R. MCCREARY, *Tell Me No Secrets: Sharing, Discipline, and the Clash of Ecclesiastical Abstention and Psychotherapeutic Confidentiality*, *Quinnipiac Law Review* 29 (2011) 77 y ss.

¹⁶ Cfr. Th. C. BERG, *Religious Displays and the Voluntary Approach to Church and State*, *Oklahoma Law Review* 63 (2010) 47 y ss.; M. STRASSER, *Passive Observers, Passive Displays, and the Establishment Clause*, *Lewis and Clark Law Review* 14 (2010) 1123 y ss.; F. M. GEDICKS, *Lynch v. Donnelly and the Terminal Silliness of Secularized Religious Symbols*, *Nevada Law Review* (2011); S. GOLDBERG, *The Coming Demise of the Crucifix*, *Rutgers J. Law & Relig.* 12 (2011) 277 y ss.; *Peter Irons, Curing a Monumental Error: The Presumptive Unconstitutionality of Ten Commandments Displays*, *Oklahoma Law Review* 63 (2010) 1 y ss.; M. J. DOLAN, *Salazar v. Buono: The Cross Between Endorsement and History*, *Northwestern University Law Review Colloquy* 105 (2010) 42 y ss.; ÍD., *Government Identity Speech and Religion: Establishment Clause Limits after Summum*, *William & Mary Bill of Rights Journal* 19 (2010) 1 y ss.; ÍD., *P.S. Untold Stories and the Cross National Monument* (October 26, 2010); S. MANCINI & M. ROSENFELD, *Unveiling the Limits of Tolerance: Comparing the Treatment of Majority and Minority Religious Symbols in the Public*

tículos la tratan en general con comentarios sobre las grandes decisiones en la materia como *Yoder* o *Smith*, otros abordan cuestiones como la doctrina de las *free exercise exemptions* o ciertas objeciones de conciencia (uso de prendas religiosas en los tribunales, rechazo de tratamiento médico, administración de ciertos fármacos, imposición de vacunas, objeción de conciencia en el mundo del trabajo o el estatus del objetor en general)¹⁷. También sería posible identificar una sección inde-

Sphere, Cardozo Legal Studies Research Paper 309 (2010); Ch. C. LUND, *Salazar v. Buono and the Future of the Establishment Clause*, Northwestern University Law Review Colloquy 105 (2010) 60 y ss.; D. B. OWENS, *No Bueno, Buono: An Essay on Salazar v. Buono and Establishment Clause Remedies* (June 7, 2010); S. BARCLAY, *Passive Acknowledgement or Active Promotion of Religion? Neutrality and the Ten Commandments in Green v. Haskell*, Brigham Young University Law Review 2010 (2010) 3 y ss.; I. BARTRUM, *Salazar v. Buono, Sacred Symbolism and the Secular State*, Northwest University Law Review 105 (2010) 1653 y ss.; J. BLOCHER, *Government Property and Government Speech*, William and Mary Law Review 52 (2011) 1413 y ss.; M. E. DODGE, *Pleasant Grove City v. Summum: Not Just a Walk in the Park*, Digest 18 (2010) 49 y ss.; J. L. THORNHILL, *Clear As Mud: Pleasant Grove City v. Summum And Riding The Undefined Line Between Government Speech And Private Speech In A Public Forum*, Mississippi College Law Review 30 (2011) 121 y ss.; P. HARRIS, *Pleasant Grove v. Summum and the Establishment Clause: Giving With one Hand, Taking with the Other?*, Willamette Law Review 46 (2010) 677 y ss.; T. ZICK, *Summum, the Vocality of Public Places, and the Public Forum*, Brigham Young University Law Review 2010 (2010) 2203 y ss.; D. W. PARK, *Government Speech and the Public Forum: A Clash Between Democratic and Egalitarian Values*, Gonzaga Law Review 45 (2009-2010) 113 y ss.; C. M. CORBIN, *Nonbelievers and Government Religious Speech*, Iowa Law Review 97 (2011); S. H. GOLDBERG, *The Government-Speech Doctrine: «Recently Minted»; But Counterfeit*, University of Louisville Law Review 49 (2010) 21 y ss.; S. D. SMITH, *Why Is Government Speech Problematic? The Unnecessary Problem, The Unnoticed Problem, and the Big Problem*, Denver University Law Review 87 (2010) 945 y ss.; S. W. GAYLORD, *Licensing Facially Religious Government Speech: Summum's Impact on the Free Speech and Establishment Clauses*, First Amendment Law Review 8 (2010) 315 y ss.; J. BLOCHER, *Viewpoint Neutrality and Government Speech*, Boston College Law Review 52 (2011) 695 y ss.; S. G. GEY, *Why should the First Amendment protect government speech when the government has nothing to say?*, Iowa Law Review 95 (2010) 1259 y ss.; C. E. HAUPT, *Mixed Public-Private Speech and the Establishment Clause*, Tulane Law Review 85 (2011) 571 y ss.; R. A. JONES, *Pick Your Poison: Private Speech, Government Speech, and the Special Problem of Religious Displays*, Brigham Young University Law Review 2010 (2010) 2045 y ss.; M. MCCARTHY, *When Government Expression Collides with the Establishment Clause*, Brigham Young University Education & Law Journal 10 (2010) 113 y ss.; S. M. LAU, *Ignoring Purpose, Context, and History: The Tenth Circuit Court in American Atheists, Inc. v. Duncan*, Brigham Young University Law Review 2011 (2011) 149 y ss.

¹⁷ Cfr. M. S. KENDE, *Free Exercise of Religion: A Pragmatic and Comparative Perspective*, South Dakota Law Review 55 (2010) 412 y ss.; R. REYES, *The Fading Free Exercise Clause*, William & Mary Bill of Rights Journal 19 (2011) 725 y ss.; M. J. WHITE, *Freedom of Conscience Versus Institutional Accommodation*, San Diego Law Review 47 (2010) 1075 y ss.; A. BROWNSTEIN,

Why Conservatives, and Others, Have Trouble Supporting the Meaningful Enforcement of Free Exercise Rights, Harvard Journal Law & Public Policy 33 (2010) 925 y ss.; W. A. FISCHER, *Do Amish One-Room Schools Make the Grade? The Dubious Data of Wisconsin v. Yoder* (March 31, 2011); G. RALEY, *Yoder Revisited: Why the Landmark Amish Schooling Case could –and should– be Overturned*, Virginia Law Review 97 (2011) 681 y ss.; K. P. LEE, *Free Exercise and Religious Mania: Neuroscience and Religious Free Exercise* (September 28, 2010); A. SCHWARTZBAUM, *The Niqab in the Courtroom: Protecting Free Exercise of Religion in a Post-Smith World*, University of Pennsylvania Law Review 159 (2011) 1533 y ss.; D. B. FROHNMAYER, *Employment Division v. Smith: «The Sky that didn't Fall»*, Cardozo Law Review 32 (2010) 1655 y ss.; S.D. SMITH, *Religious Freedom and its Enemies, or Why the Smith Decision May Be a Greater Loss Now Than It Was Then*, Cardozo Law Review 32 (2011) 2033 y ss.; P. S. BERMAN, *Towards a Jurisprudence of Hybridity*, Utah Law Review 2010 (2010) y 11 ss.; M. A. HAMILTON, *The 'Licentiousness' in Religious Organizations and Why it is Not Protected Under Religious Liberty Constitutional Provisions*, William & Mary Bill of Rights Journal 18 (2010) 953 y ss.; D. S. DAY, *Some Reflections on Modern Free Exercise Doctrine: A Review Essay*, South Dakota Law Review 55 (2010) 498 y ss.; M.W. MCCONNELL, *Schism, «Plague, and Late Rites in the French Quarter: The Strange Story Behind the Supreme Court's First Free Exercise Case»*, Stanford Public Law Working Paper 1675213 (2010); Ch.C. LUND, *Exploring Free Exercise Doctrine: Equal Liberty and Religious Exemptions*, Tennessee Law Review 77 (2010) 351 y ss.; L. UNDERKUFFLER, *Odious Discrimination and the Religious Exemption Question*, Cardozo Law Review 32 (2011) 2069 y ss.; N. TEBBE, *Smith in Theory and Practice*, Cardozo Law Review 32 (2011) 2055 y ss.; J. G. DWYER, *The Good, the Bad, the Ugly of Employment Division v. Smith for Family Law*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1781 y ss.; S. M. FELDMAN, *Conservative Eras in Supreme Court Decision Making: Employment Division v. Smith, Judicial Restraint, and Neoconservatism*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1791 y ss.; L. D. WARDLE, *Protection of Healthcare Providers' Rights of Conscience in American Law: Present, Past, and Future*, Ave Maria Law Review 9 (2010); B. J. HILL, *Whose Body? Whose Soul? Medical Decision-Making on Behalf of Children and the Free Exercise Clause Before and After Employment Division v. Smith*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1857 y ss.; M. A. HAMILTON, *Employment Division v. Smith at the Supreme Court: The Justices, the Litigants, and the Doctrinal Discourse*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1671 y ss.; S. D. JAMAR, *Religious Use of Copyrighted Works after Smith, RFRA, and Eldred*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1879 y ss.; Ch. C. LUND, *Exploring Free Exercise Doctrine: Equal Liberty and Religious Exemptions*, Tennessee Law Review 77 (2010) 351 y ss.; C. M. MURPHY, *Concerning Their Hearts and Minds State of Oregon v. Beagle, Faith-Healing, and a Suggestion for Meaningful Free Exercise Exemptions*, Gonzaga Law Review 46 (2010-2011) 147 y ss.; W. J. CAMPBELL, *A New Approach to Nineteenth-Century Religious Exemption Cases*, Stanford Law Review 63 (2011) 973 y ss.; J. W. TUCKER, *No Hats in Court: Michigan's Justifications for Free Exercise Indifference*, University of Toledo Law Review 41 (2010) 1039 y ss.; E. CATALANO, *Healing or Homicide?: When Parents Refuse Medical Treatment for Their Children on Religious Grounds*, Buffalo Women's Law Journal 18 (2010) 157 y ss.; J. K. SAX, *Access to Prescription Drugs: A Normative Economic Approach to Pharmacist Conscience Clause Legislation*, Maine Law Review 63 (2010) 89 y ss.; N. E. HORTON, *Article I, Section 11: A Poor «Plan B» for Washington's Religious Pharmacists*, Washington Law Review 85 (2010) 739 y ss.; S. MAHMOUD-DAVIS, *A Proposal for a Federal Emergency Vaccination Law*, Health Matrix 20 (2010) 219 y ss.; L. GOODRICH, *The Health Care and Conscience Debate: Obama Strikes a Blow Against Conscience*, Engage 12 (March 15, 2011) 121 y ss.; L. A. FRACASSO, *Developing Immunity: The Challenges in Mandating Vaccinations in the Wake of a Biological Terrorist Attack*, DePaul Journal Health Care Law

pendiente de trabajos referidos a las dos propuestas legislativas en defensa de la libertad religiosa: la RFRA del 93 y las RFRA estatales, así como la RLUIPA del 2000¹⁸. Y otros dos aspectos del libre ejercicio de la religión han sido abordados en

13 (2010) 1 y ss.; M. LASHER, *Improving Indiana's Mandatory Immunization Programs*, Indiana Health Law Review 7 (2010) 117 y ss.; T. MATHISON, *Fundamentally Religious or Fundamentally Wrong: A Legal Examination of when Medical Professionals may refuse to Distribute Contraception*, Georgetown Journal Gender & Law 12 (2011) 43 y ss.; P. PARKINSON, *Accommodating Religious Beliefs in a Secular Age: The Issue of Conscientious Objection in the Workplace*, University of New South Wales Law Journal 34 (2011) 281 y ss.; R. S. MYERS, *The Right to Conscience and the First Amendment*, Ave Maria Law Review 9 (2010) 123 y ss.; C. MARBLESTONE, *A Matter of Conscience: United States v. Seeger and the Supreme Court's Historical Failure to Define Conscientious Objector Status Under the First Amendment*, Hastings Constitutional Law Quarterly 38 (2010) 201 y ss.

- ¹⁸ En relación a la RFRA: J. E. KEY, *This Land is my Land: The Tension between Federal Use of Public Land and the Religious Freedom Restoration Act*, Air Force Law Review 65 (2010) 51 y ss.; Z. S. KELIN & K. Y. SCHOOLEY, *Dramatically Narrowing RFRA's Definition of «Substantial Burden» in the Ninth Circuit. The Vestiges of Lyng v. Northwest Indian Cemetery protective Association in Navajo Nation et al. v. United States Forest Service et al.*, South Dakota Law Review 55 (2010) 426 y ss.; J. M. WILES, *Have American Indian Been Written out of the Religious Freedom Restoration Act?*, Montana Law Review 71 (2010) 471 y ss.; J. A. EDWARDS, *Yellow Snow on Sacred Sites: A Failed Application of the Religious Freedom Restoration Act*, American Indian Law Review 34 (2009-2010) 151 y ss.; J. L. FJERSTAD, *The First Amendment and Eagle Feathers: An Analysis of RFRA, BGEPA, and the Regulation of Indian Religious Practices*, South Dakota Law Review 55 (2010) 528 y ss.; R. N. KALEY, *Can Taxpayers Stand Discrimination?: Lack of Standing and the Religious Freedom Restoration Act Permits the Executive Branch to Fund Discrimination within Religious Organizations*, Journal Catholic Legal Studies 49 (2010) 195 y ss.; S. D. POLLOCK, *Immigration Law vs. Religious Freedom: Using the Religious Freedom Restoration Act to Challenge Restrictive Immigration Laws and Practices*, Rutgers Journal Law & Religion 12 (2011), 295 y ss. Sobre las state RFRA: Ch. LUND, *Religious Liberty after Gonzales: A Look at State RFRA's*, South Dakota Law Review 55 (2010) 466 y ss.; C. E. LANERI, *The Texas Religious Freedom Restoration Act: Does it really work?*, Texas Wesleyan Law Review 16 (2010) 457 y ss.; E. J. BERGERON, *Organized RFRAff: A Recommendation to the Louisiana Legislature on the Best Way to Accomplish a State Religious Freedom Restoration Act*, Loyola Journal Public International Law 12 (2010) 133 y ss. Sobre la RLUIPA: B. N. WALKER, *Unequal Application of RLUIPA's «Equal Terms» Provision* (February 24, 2011); I. C. LUPU & R. W. TUTTLE, *The Forms and Limits of Religious Accommodation: The Case of RLUIPA*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1907 y ss.; A. GLOVER, *The Pit and the Pendulum: How Far Can RLUIPA Go in Protecting the Amish?*, Penn State Environmental Law Review 19 (2011) 109 y ss. Sobre regulación urbana del suelo: B. ALDEN, *Reconsidering RLUIPA: Do Religious Land Use Protections Really Benefit Religious Land Users?*, University of California Los Angeles Law Review 57 (2010) 1779 y ss.; R. BIRMINGHAM, *Smash or Save: The New York City Landmarks Preservation Act and New Challenges to Historic Preservation*, Journal of Law & Policy 19 (2010) 271 y ss.; A. J. MACLEOD, *A Non-Fatal Collision: Interpreting RLUIPA Where Religious Land Uses and Community Interests Meet*, [Abstract], Urban Lawyer 42 (2010) 41 y ss.; W. F. SULLIVAN, *Religion, Land, and Rights*,

el ámbito del trabajo y en su relación a la libertad de expresión protegida por la cláusula de *free speech*. Por lo que se refiere al primero, se han publicado estudios sobre el Título VII de la *Civil Rights Act* de 1964 en materia de adaptación religiosa o sobre la doctrina de la *ministerial exception*¹⁹. Y en relación a la garantía constitu-

Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law 4 (2011); K. STOUT, *Tent Cities and RLUIPA: How a New Religious-Land-Use Issue Aggravates RLUIPA*, Seton Hall Law Review 41 (2011) 465 y ss.; B. ALDEN, *Reconsidering RLUIPA: Do Religious Land Use Protections Really Benefit Religious Land Users?*, University of California Los Angeles Law Review 57 (2010) 1779 y ss.; J. C. DUNKELBERGER, *Missed Opportunity or Dodged Bullet? The Tenth Circuit's Non-decision in Rocky Mountain Christian Church v. Board of County Commissioners*, Brigham Young University Law Review 2011 (2011) 99 y ss.; T. J. NODA, *RLUIPA's Equal Terms Provision and Exclusionary Zoning in River of Life Kingdom Ministries v. Village of Hazel Crest*, Boston College Law Review 52 (2011) 71 y ss.; Y. Z. MALIK, *The Religious Land Use and Institutionalized Persons Act: A Perspective on the Unreasonable Limitations Provision*, Tennessee Law Review 78 (2011) 531 y ss.; T. J. NODA, *The Role of Economics in the Discourse on RLUIPA and Nondiscrimination in Religious Land Use*, Boston College Review 1 (2011). Y sobre libertad religiosa en centros penitenciarios: T. G. STOUT, *The Costs of Religious Accommodation in Prisons*, Virginia Law Review 96 (2010) 1201 y ss.; A. ORENSTEIN, *Once We Were Slaves, Now We are Free: Legal, Administrative, and Psychosocial Issues Raised by Passover Celebrations in Prison*, Indiana Legal Studies Research Paper 195 (2011); A. VOLOKH, *Everything We Know About Faith-Based Prisons*, Emory Public Law Research Paper 11-145 (2011); T. RUSHFORTH, *Religious Exercise in Prison - A Guide for Prison Officials* (February 12, 2011); R. BINGER, *Prison Ain't Hell: An Interview with the Son of Sam - David Berkowitz, and Why State-Funded Faith-Based Prison Rehabilitation Programs Do Not Violate the Establishment Clause*, Pace Law Review 31 (2011) 488 y ss.; Th. M. BLUMENTHAL & K. M. BRUNIE, *The Absence of Penological Rationale in the Restrictions on the Rights of Incarcerated Women*, University of Arkansas Little Rock Law Review 32 (2010) 461 y ss.

¹⁹ Cfr. K. S. BLAIR, *Better Disabled than Devout? Why Title VII Has Failed to Provide Adequate Accommodations Against Workplace Religious Discrimination*, Arkansas Law Review 63 (2010) 515 y ss.; R. W. DYER, JR., *Qualifying for the Title VII Religious Organization Exemption: Federal Circuits Split over Proper Test [Spencer v. World Vision, Inc., No. 08-35532, 2011 WL 208356 (9th Cir. Jan. 25, 2011) (per curiam)]*, Missouri Law Review 76 (2011) 545 y ss.; B. S. BOULTER, *Goldilocks and the Three-Judge Panel: Spencer v. World Vision, Inc. and the Religious Organization Exemption of Title VII*, Brigham Young University Law Review 2011 (2011) 33 y ss.; D. S. SIDHU, *Interpreting and Revising Title VII to Prohibit Workplace Segregation Premised on Religion*, New York University Review of Law & Social Change 35 (2011); R. J. FRIEDMAN, *Religious Discrimination in the Workplace: The Persistent Polarized Struggle*, Transactions: Tennessee Journal of Business Law 11 (2010) 143 y ss.; Ch. A. SULLIVAN, *Plausibly Pleading Employment Discrimination*, William and Mary Law Review 52 (2011) 1613 y ss.; J. T. WEISS, *The First Amendment Right to Free Exercise of Religion, Nondiscrimination Statutes based on Sexual Orientation and Gender Identity, and the Free Exercise Claims of Non-Church-Related Employers*, Florida Coastal Law Review 12 (2010) 15 y ss.; D. N. KAMINER, *Religious Conduct and the Immutability Requirement: Title VII's Failure to Protect Religious Employees in the Workplace*, Virginia Journal of Social Policy & Law 17 (2010) 453 y ss.; S. HASAN, *Veiling Religion in the Force: The Validity of «Religion-Neutral Appearance» as an Employer Interest*, University of California Los Angeles Journal of Islamic & Near Eastern Law 9 (2009-2010) 87

cional de la libertad de expresión, hay artículos que la han tratado también o con especial referencia a dos sentencias del Tribunal Supremo (*CLS v. Martinez* y *Snyder v. Phelps*) o respecto al estatuto de exención fiscal de las organizaciones religiosas²⁰.

y ss.; B. C. MARTIN, *Protecting Preachers from Prejudice: Methods for Improving Analysis of the Ministerial Exception to Title VII*, Emory Law Journal 59 (2010) 1297 y ss.; Ch. C. LUND, *Understanding the Ministerial Exception*, North Carolina Law Review 90 (2011).

²⁰ Cfr. E. G. WALDMAN, *Regulating Student Speech: Suppression Versus Punishment*, Indiana Law Journal 85 (2010) 1113 y ss.; J. SHULMAN, *Epic Considerations: The Speech that the Supreme Court Would Not Hear in Snyder v. Phelps*, Cardozo Law Review de Novo 2011 (2011) 35 y ss.; D. POLLARD-SACKS, *Snyder v. Phelps: A Slice of the Facts and Half an Opinion*, Cardozo Law Review de Novo 2011 (2011) 64 y ss.; H. KENNEDY, *Intolerance in the Name of Tolerance: Will the United States Supreme Court's Circular Reasoning in its Decision of Christian Legal Society v. Martinez be the Downfall of Student Organizations as We Know Them?* (January 24, 2011); J. A. NICE, *How Equality Constitutes Liberty: The Alignment of CLS v. Martinez*, Hastings Constitutional Law Quarterly 38 (2011) 631 y ss.; J. C. PHILLIPS, «All of the Blood and Treasure»: *The Founders on Christian Legal Society Chapter of the University of California, Hastings College of the Law v. Martinez*, Mississippi College Law Review 30 (2011) 15 y ss.; L. C. GRIFFIN, *Snyder v. Phelps: Searching for a Legal Standard*, Cardozo Law Review de Novo 2010 (2010) 353 y ss.; D. POLLARD-SACKS, *Snyder v. Phelps, the Supreme Court's Speech-Tort Jurisprudence, and Normative Considerations*, Yale Law Journal Online 120 (2011) 193 y ss.; B. J. HILL, *Property and the Public Forum: An Essay on Christian Legal Society v. Martinez*, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy 6 (2010) 49 y ss.; T. M. MASSARO, *Christian Legal Society v. Martinez: Six Frames*, Hastings Constitutional Law Quarterly 38 (2011) 569 y ss.; J. A. NICE, *How Equality Constitutes Liberty: The Alignment of CLS v. Martinez*, Hastings Constitutional Law Quarterly 38 (2011) 631 y ss.; J. WILLEMS, *The Loss of Freedom of Association in Christian Legal Society v. Martinez*, 130 S.Ct. 2971 (2010), Harvard Journal of Law and Public Policy 34 (2011) 806 y ss.; J. WALDRON, *Toleration and Calumny: Bayle, Locke, Montesquie and Voltaire on Religious Hate Speech*, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, Paper 244 (2010); T. M. MASSARO, *Christian Legal Society v. Martinez: Six Frames*, Arizona Legal Studies Discussion, Paper No. 10-27 (Aug. 12, 2010); Ch. J. RUSSO & W. E. THRO, *Preserving Orthodoxy on Secular Campuses: The Right of Student Religious Organizations to Exclude Non-Believers*, Education Law Reporter 250 (2010) 497 y ss.; C. E. WELLS, *Regulating Offensiveness: Snyder v. Phelps, Emotion, and the First Amendment*, University of Missouri School of Law Legal Studies Research, Paper No. 2010-14 (July 27, 2010); W. P. MARSHALL, *Smith, Christian Legal Society, and Speech-Based Claims for Religious Exemptions from Neutral Laws of General Applicability*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1937 y ss.; R. A. EPSTEIN, *Church and State at the Crossroads: Christian Legal Society v. Martinez*, Cato Supreme Court Review 2009-10 (2009-2010), 105 y ss.; L. C. MCCLAIN, *Religious and Political Virtues and Values in Congruence or Conflict?: On Smith, Bob Jones University, and Christian Legal Society*, Cardozo Law Review 32 (2011) 1959 y ss.; B. S. BOULTER, *Expensive Speech: Citizens United v. FEC and the Free Speech Rights of Tax-Exempt Religious Organizations*, Brigham Young University Law Review 2010 (2010) 2243 y ss.; H. C. COMBEST, *Symbolism as Savior: A Look at the Impact of the IRS Ban on Political Activity by Tax-Exempt Religious Organizations*, Alabama Law Review 61 (2010) 1121 y ss.; J. R. DOROCAK & LI. E. PEAKE, *Political Activity of Tax-Exempt Churches, Particularly after Citizens United v. Federal Election Commission and California's Proposition 8 Ban on Same-Sex Marriage: Render unto Caesar What is Caesar's*, First Amendment Law Review 9 (2011) 448 y ss.

Pues bien, una última clase de escritos la podemos ver ocupándose de la cuestión de los abusos por parte del clero dentro de la categoría más amplia de *clergy malpractice*, tratando algunos el aspecto de la inmunidad en la materia –cuando la afectada fuera la Iglesia católica– de la Santa Sede²¹. Y finalmente entre las recensiones, las ha habido a los libros de Steven H. Shiffrin (*The Religious Left and Church-State Relations* de 2009, a cargo de Feldman, Greenawalt y Meyler)²² y de Douglas Laycock (*Religious Liberty, Volume one* (2010), por cuenta de los profesores Wexler, Berg y Smith)²³.

Para terminar este apartado vamos a referir aquí algunos de los congresos, simposios y demás conferencias que tuvieron lugar en Estados Unidos durante los años 2010 y 2011. El 12 de febrero del 2010 la Universidad de Oklahoma y su revista de derecho, la *Oklahoma Law Review*, organizaron una conferencia bajo el título de «Sign of the Times: The First Amendment and Religious Symbolism». Al acto fueron invitados los profesores Peter Irons de la Universidad de California (San Diego), Thomas C. Berg de la *St. Thomas School of Law* y Carl H. Esbeck de la *Missouri School of Law*. El 18 de febrero la *South Dakota School of Law* organizó un simposio conmemorando los veinte años transcurridos desde *Smith* bajo el título «The Twenty Year Anniversary of *Employment Division v. Smith*: Reassessing the Free Exercise Clause and the Intersection between Religion and the Law» y cuyas ponencias fueron publicadas en su revista de derecho. El 26 de febrero del 2010 la BYU (*Brigham Young University*) abrió sus puertas para un congreso organizado, además de la *J. Reuben Clark Law School* de la BYU, por la *Ave Maria School of Law* y la *University*

²¹ Cfr. C. F. FAIN, *Clergy Malpractice and First Amendment Religion Clauses*, *Akron Law Review* 44 (2011) 221 y ss.; J. FANTAU, *Rethinking the Sovereign Status of the Holy See: Towards a Greater Equality of States and Greater Protection of Citizens in United States Courts*, *Cardozo Journal International & Comparative Law* 19 (2011) 487 y ss.; J. W. NEU, *Workers of God: The Holy See's Liability for Clerical Sexual Abuse*, *Vanderbilt Law Review* 63 (2010) 1507 y ss.

²² Cfr. S. M. FELDMAN, *Law and Religion: Modernity, Religion, and the Public Sphere*, *Tulsa Law Review* 45 (2010) 845 y ss.; K. GREENAWALT, *In Celebration of Steven Shiffrin's The Religious Left and Church-State Relations*, *Cornell Journal Law & Public Policy* 19 (2010) 741 y ss.; y B. MEYLER, *Constitutional Commitments and Religious Identity*, *Cornell Journal Law & Public Policy* 19 (2010) 751 y ss. A estos dos últimos contestó el autor de la obra en S. H. SHIFFRIN, *The Religious Left and Church-State Relations: A Response to Kent Greenawalt and Bernie Meyler*, *Cornell Journal Law & Public Policy* 19 (2010) 761 y ss.

²³ Cfr. J. WEXLER, *I'm a Laycockian!*, *Texas Law Review* 89 (2011) 935 y ss.; Th. C. BERG, *Laycock's Legacy*, *Texas Law Review* 89 (2011) 901 y ss.; y en S. D. SMITH, *Lawyering Religious Liberty*, *Texas Law Review* 89 (2011) 917 y ss. Libro sobre el que volvió su autor en D. LAYCOCK, *Reviews of a Lifetime*, *Texas Law Review* 89 (2011) 949 y ss.

Faculty for Life bajo el título de «The Future of Rights of Conscience in Health Care: Legal and Ethical Perspectives»; sus textos pueden encontrarse en el número 9 de la revista *Ave Maria Law Review*. Los días 23 y 24 de abril, la *University of San Diego School of Law* organizó unas jornadas bajo el título de «Freedom of Conscience: Stranger in a Secular Land» en las que intervinieron los profesores Kent Greenawald de la *Columbia Law School* y Andrew Koppelman de la *Northwestern Law School*. Más tarde, el 11 de junio de 2010 el *Center for Law and Religion* de la *St. John's University School of Law* planteó un simposio sobre el concepto de laicidad en perspectiva comparada en el que intervinieron profesores como Douglas Laycock y Javier Martínez-Torrón. Y entre el 25 de Julio y el 1 de agosto de 2010 se desarrolló en Washington DC el decimotercero congreso internacional de derecho comparado organizado por la *International Academy of Comparative Law* y la *American Society of Comparative Law*. En este congreso y en el *Georgetown Law Center* se discutió el jueves 29 el asunto de la «Religion and the Secular State» bajo la dirección de los profesores W. Cole Durham, Jr., director del *International Center for Law and Religion Studies* (ICLRS) en la BYU y el profesor Javier Martínez-Torrón, director del departamento de derecho eclesiástico del Estado en la facultad de derecho de la UCM. Con ocasión del congreso, el ICLRS y la *Columbus School of Law* de la *Catholic University of America* (CUA) bajo su «Interdisciplinary Program in Law and Religion» dirigido por el profesor Robert Destro organizó unas conferencias en la CUA los días 30 y 31 de julio, dentro de ese marco general de «Religion and the Secular State» con temas como «The Autonomy of Religious Institutions», «Limits on Legal Regulation of Religion», «Financial Support of Religion», «Religious Symbols in Public Space», «Freedom of Religion», y «Freedom of Expression and Offenses against Religion».

Avanzando en el tiempo, el 1 de octubre del 2010 se produjo un simposio sobre la sentencia del Supremo en *CLS v. Martinez* (2010) en el mismo lugar de los hechos: el *Hastings College of the Law*. El título elegido para la ocasión fue «The Constitution on Campus: The Case of CLS v. Martinez» y fue publicado en el número 3 del volumen 38 del *Hastings Constitutional Law Quarterly* en 2011. En el acto intervinieron los profesores Vikram Amar School y Alan Brownstein de de la *UC Davis Law*, así como Jesse Choper de la *UC Berkeley School of Law*. Pues bien, en ese mismo mes, pero del 3 al 5 de octubre, tuvo lugar en la facultad de derecho de la BYU en Provo (Utah) el decimoséptimo congreso anual sobre derecho y religión organizado por el ICLRS bajo el título de «Religion in Contemporary Legal Systems». Reunió a 65 delegados de 36 países que discutieron aspectos diversos como «Islam in Contemporary Legal Systems», «Religion, Law, and the Encounter with Secularism», «The Cha-

llenge of Protecting Religious Sensitivities», «Regulating Religious Speech and Symbols», «Islamic Practice: Differing Experiences» y «The Religion Jurisprudence of the European Court of Human Rights». Entre los profesores españoles asistentes, Rafael Palomino intervino con una brillante ponencia sobre las «Legal Dimensions of Secularism: Challenges and Problems». Al año siguiente, el simposio de 2011 tuvo lugar del 2 al 4 de octubre en el mismo escenario bajo el epígrafe de «Religious Freedom in a Pluralistic Age: Trends, Challenges, and Practices». De todos modos, uno de los congresos más interesantes que hubo en el año 2010 tuvo como escenario la ciudad de New York y fue organizado por la *Cardozo School of Law* de la *Yeshiva University* los días 6 al 8 de octubre con ocasión del 20 aniversario de la sentencia *Smith* (1990). El evento fue dirigido por la profesora Marci Hamilton. Y los temas tratados en el mismo fueron: «Religious Liberty», «Family Law and Women's Rights», «The Court and the Political Culture», «*Smith* in Operation», «RFRA and RLUIPA», y «*Smith's* Interaction with First Amendment Principles Beyond the Free Exercise Clause». En este simposio intervinieron, entre otros, los profesores Daniel Conkle de la facultad de derecho de la Universidad de Indiana, Richard Garnett de *Notre Dame University*, Steven Smith de la Universidad de San Diego, Stephen Feldman de la Universidad de Wyoming, Laura Underkuffler de la *Cornell Law School*, Ira C. Lupu de la *George Washington University*, Angela Carmella de la *Seton Hall School of Law* y William Marshall de la Universidad de North Carolina. Como ya indicamos en su momento, el número 32 de la *Cardozo Law Review* publicado en mayo del 2011 recoge todas las ponencias. Por otra parte, del 18 al 20 de noviembre del 2010 tuvo lugar la convención nacional de abogados (*National Lawyers Convention*) organizada por la *Federalist Society* bajo el sugerente tema de «Controlling Government: The Framers, the Tea Parties and the Constitution». El capítulo sobre libertad religiosa giró sobre la sentencia del Supremo *CLS v. Martinez* (2010) y en su discusión intervinieron, entre otros, los profesores Richard W. Garnett (*Notre Dame Law School*) y Eugene Volokh (*Los Angeles School of Law*) bajo la moderación del juez del undécimo circuito William H. Pryor, Jr. También se produjo un debate acerca de la constitucionalidad de la discutida «8 Proposition» de California sobre matrimonios del mismo sexo en el que intervino el profesor Richard A. Epstein de la *New York University School of Law*. También la facultad de derecho de Iowa organizó un simposio los días 25 y 26 de febrero sobre el argumento del futuro de la enseñanza del derecho en el que intervino, entre otros, el decano de la *Irvine School of Law* de la Universidad de California, Erwin Chemerinsky. Al mes siguiente, el actual arzobispo de Filadelfia y entonces de Denver, el capuchino Charles Chaput, desarrolló una lúcida conferencia el 1 de

marzo de 2011 sobre los principios de las relaciones entre Iglesia y Estado en los Estados Unidos como un modelo para otros países. La ponencia llevó por título «Subject to the Governor of the Universe: The American Experience and Global Religious Liberty» y fue pronunciada en el *Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs* de *Georgetown University* en Washington DC. Una exposición muy interesante que fue vertebrada sobre cuatro principios fundamentales: primero, el modelo norteamericano de libertad religiosa encuentra su fundamento en la tradición humanista cristiana; segundo, en el centro de ese modelo está una visión cristiana de la santidad y destino de la persona humana; tercero, en este esquema, la religión es algo más que un asunto privado entre el individuo creyente y Dios en la medida en que la religión es esencial para las virtudes necesarias de un pueblo libre y se espera de los grupos religiosos vitales contribuciones a la construcción social del país; y cuarto, finalmente, aunque el modelo funciona en América sus principios pueden ser adaptados por otros países. Como es sabido, el arzobispo Chaput trabajó por tres años (2003-2006) como *Commissioner* dentro de la *United States Commission on International Religious Freedom* (USCIRF) y formó parte de la delegación oficial norteamericana que vino a Córdoba (España) en el 2005 para participar en la conferencia sobre «Anti-Semitism and Other Forms of Intolerance» de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y, por último, para terminar con el capítulo de los congresos, indicar que del jueves 8 al sábado 10 de septiembre tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile uno de ellos sobre Religión y Constitución (la *Second ICLARS Conference*, la primera fue en 2009 en Milán) organizado por el *International Consortium for Law and Religion Studies* (ICLARS), el ICLRS y el Centro de libertad religiosa de la facultad de derecho de la Universidad Católica de Chile). Entre los profesores españoles asistentes, los catedráticos Javier Martínez Torrán, Alberto de la Hera, Iván C. Ibán y Rafael Palomino.

1.4. *Otras noticias de interés*

Aunque los medios se ocuparon del intento de quema del Corán en el verano del 2010 por el pastor de Florida Terry Jones coincidiendo con el aniversario del 11 de septiembre, las principales controversias sociales tuvieron por objeto, en la costa oeste, la proposición 8 que prohibía los *same-sex marriages* y que fue anulada por un tribunal federal de distrito de California, así como el intento más reciente de prohibir la circuncisión masculina por vía de consulta popular en San Francisco y también evitado por un tribunal de la ciudad. Mientras tanto, en la otra costa, nos encontramos ante la polémica cons-

trucción de una mezquita cerca de la zona cero en el bajo Manhattan (NYC), con el apoyo del presidente Obama y del alcalde de la ciudad Bloomberg. Y es que el 5 de mayo del 2010 un departamento municipal aprobó la transformación de un edificio (perteneciente a la cadena *Burlington Coat Factory*), a dos manzanas del lugar de los atentados contra las torres gemelas, para un centro islámico con diversas instalaciones en su interior, entre ellas, una mezquita²⁴. Pues bien, a esto, habría que añadir todo lo relativo a la superación en el ejército de la política DADT, *don't ask, don't tell*, sobre homosexualidad, en particular la oposición de los capellanes militares, así como la polémica suscitada en torno a la DOMA. Y en relación a los abusos sexuales por parte del clero, es verdad que su repercusión ha ido cediendo pero no ha desaparecido en la intención de algunos sectores el deseo de hacer último responsable de esa situación a la Santa Sede. En este sentido, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación que se le presentó en *Holy See v. Doe*, 130 S.Ct. 3497 (certiorari denied, June 28, 2010). Se trata de un caso que le llegó en apelación del noveno circuito y en el que un hombre de Seattle (Washington) pretendía que la Santa Sede respondiera por el abuso sufrido a manos de un sacerdote en los años 60. En *Doe v. Holy See*, 557 F.3d 1066 (9th Cir., Mar. 3, 2009) el tribunal le dio la razón creyendo que podría proceder contra ella en razón de la doctrina de *respondeat superior*, bajo la excepción de acción por responsabilidad de la *Foreign Sovereign Immunity*²⁵. Pero el Vaticano estuvo implicado también en

²⁴ Un tribunal de NY negó capacidad procesal a Timothy Brown, anterior bombero, que intentaba anular la decisión de la comisión municipal de urbanismo (*New York City Landmark Preservation Commission*) en la que no se concedía el carácter de edificio protegido a ese viejo lugar dañado por los atentados del 11 de septiembre y que se pretende demoler ahora para levantar en su lugar el proyectado centro islámico. Para el caso: *Brown v. New York City Landmarks Preservation Commission* (NY Co. Sup. Ct., July 7, 2011). En realidad, esto representaba una manifestación más del rechazo a los proyectos de construcción de mezquitas a lo largo del país, y a la presencia pública del Islam en la sociedad, por muchos norteamericanos que ven en ello un intento de imposición final de la ley Sharia, en lugar de respetar el derecho constitucional de los Estados Unidos, como así lo recogía un artículo del *New York Times* bajo el título de *Across Nation, Mosque Projects Meet Opposition*, publicado el 7 de agosto del 2010. La anterior candidata republicana Sarah Palin dijo en esos días que el proyecto era una provocación innecesaria.

²⁵ Pero aquí no se detuvo la historia. El 13 de septiembre de 2011 dos grupos norteamericanos, el *Center for Constitutional Rights* (CCR) [<http://www.ccrjustice.org/iccvaticanprosecution>] y el *Survivors Network of those Abused by Priests* (SNAP) [<http://www.snapnetwork.org/>] decidieron interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya contra el Santo Padre y otros tres Cardenales, Bertone, Sodano y Levada. Fundamentan la jurisdicción del Tribunal en el caso alegando que esos abusos cometidos deben ser considerados como crímenes

algún otro caso como aquel que se planteó en un tribunal federal de distrito de New York y en el que se pedía el rechazo de una cláusula de elección de foro de competencia fijada en unos contratos sobre uso de varias imágenes vaticanas. En *Magi XXI v. Stato della Città del Vaticano*, 2011 WL 3794057 (ED NY, Aug. 24, 2011) el tribunal federal mantuvo el foro elegido en exclusiva del Estado del Vaticano.

Si pasamos ahora a las encuestas, estas son útiles para definir el mapa religioso de los Estados Unidos y tomar pulso a su sociedad. Así, en febrero del 2011, el *Public Religion Research Institute* publicó un estudio sobre la visión que el pueblo americano tenía de la comunidad musulmana en América, el tercer grupo religioso del país. El 56% de los encuestados parecía respaldar el intento del Congreso de examinar esa tendencia radical entre los musulmanes americanos; el 46% creía que esta comunidad no había hecho lo suficiente por oponerse al extremismo en sus grupos; y el 22% creía que pretenden establecer la Sharia como ley del país. Por su parte, un sondeo Gallup dijo en febrero que el 58% de los entrevistados parecía estar satisfecho con la influencia de la religión organizada en Estados Unidos. Según el *Pew Forum* a principios de 2011 el nuevo Congreso norteamericano estaría compuesto por 57% de protestantes, 29% de católicos, 7% de judíos, 3% de mormones, 1% de ortodoxos, 0.6% de budistas, y 0.4% de musulmanes. Entre los protestantes, los más numerosos son baptistas, metodistas, presbiterianos, episcopalianos y luteranos. Siguiendo con Gallup, en diciembre 2010, el 40% de americanos apoyaba el creacionismo como origen del ser humano. Sobre esas mismas fechas una encuesta reflejó que el 74% de los entrevistados eran favorables a los símbolos religiosos, como los belenes, sobre suelo público y el 80% se mostraba partidario de celebrar fiestas religiosas en las escuelas públicas. Finalmente, el *First Amendment Center* hizo público en septiembre del 2010 una encuesta en la que el 75% apoyaba el discurso religioso de estudiantes sobre su fe religiosa en acontecimientos de la escuela pública, mientras el 80% también era favo-

contra la humanidad. El escrito presentado consta de 80 páginas y aporta documentación de unas 20 mil. Como sabemos, la CPI es un órgano independiente de Naciones Unidas y tiene jurisdicción sobre 117 países que ratificaron el Estatuto de Roma de 1998 por el que se creó. Ni Estados Unidos ni el Estado del Vaticano están entre ellos. Por otra parte, es sabido que la competencia del tribunal se extiende únicamente a crímenes de guerra o contra la humanidad, además de genocidio, cometidos tras su creación el 1 de julio de 2002. Así pues, el tribunal probablemente abrirá una investigación preliminar para determinar si tiene jurisdicción y cerrará el caso por falta de ella. Sin embargo, aunque no prospere la reclamación, supone una nueva pieza en esa maniobra de desgaste iniciada en la costa este de los Estados Unidos y alentada recientemente en Irlanda.

rable a que esos estudiantes pudieran ofrecer alguna oración en esos momentos, el 28% no pensaba que la Primera enmienda exigiera una clara separación entre la Iglesia y el Estado, el 53% coincidía en pensar que la Constitución norteamericana respondía a una nación cristiana, el 76% defendía que el Congreso o el Presidente del gobierno declararan un día nacional de oración, el 48% consideraba la religión del candidato a la hora de votar por él, y el 28% creía que la libertad de culto no podía amparar a los grupos extremistas marginales.

En otro orden de cosas, muy propio del espíritu de competición norteamericano ha sido siempre la organización de combates dialécticos entre estudiantes de derecho, algo en lo que se entrenan desde sus primeros años de escuela. No es de extrañar entonces que, en un campo como el nuestro de libertad religiosa, también exista ese tipo de pugna dialéctica que organiza la sección de estudiantes de la *J. Reuben Clark Law Society* en la facultad de derecho de la *George Washington University* en la capital federal de la nación desde el año 2007 bajo el nombre de *National Religious Moot Court Competition*. En ella pueden participar hasta 24 equipos compuestos por dos estudiantes de todas las escuelas de derecho acreditadas por la ABA (*American Bar Association*). La quinta de esas competiciones tuvo por objeto la RLUIPA en su aspecto de regulación urbana²⁶. Se celebró los días 4 y 5 de febrero de 2011 y en ella formaron parte del jurado el juez federal del circuito de apelación para DC, Thomas B. Griffith, el profesor Michael McConnell del *Constitutional Law Center* de la Universidad de Stanford y Melissa Rogers de la *Wake Forest University*. El premio se lo llevó el equipo de alumnas de la *Boston College Law School*, una de las cuales recibió también el premio a la mejor defensa oral (*Best Oral Advocate*), mientras que el premio al mejor escrito de defensa (*Best Brief*) recayó en dos estudiantes del *Kentucky College of Law*.

²⁶ Cuestiones a debatir presentadas en los años anteriores fueron: en el 2010 (la cuarta competición anual) tuvo por objeto las adaptaciones religiosas bajo el Título VII de la *Civil Rights Act*, en concreto sobre las decisiones de un departamento de policía local en materia de actividades y vestuario de un oficial; el año anterior, 2009 (tercera competición), el problema escogido para su discusión fue el de la doctrina de la “ministerial exception” a las leyes sobre discriminación laboral, así como casos de libre ejercicio sobre discriminación por la orientación sexual; la segunda competición anual del 2008 se centró en las controversias sobre capellanías militares y las implicaciones de las cláusulas religiosas y de la RFRA; finalmente, la primera del 2007 tuvo por objeto los derechos de las asociaciones estudiantiles de carácter religioso en las facultades estatales de derecho, en concreto los problemas surgidos ante la política de la universidad que prohíbe cualquier discriminación por razón religiosa u orientación sexual.

Pero la libertad religiosa en Estados Unidos cuenta con instituciones y personas a las que debemos referirnos también aquí. En este sentido, la *Ave Maria Law School* creó en noviembre de 2010 un nuevo centro sobre matrimonio, religión y política, el *Center for Research on Marriage, Religion and Public Policy*, bajo la dirección de Maggie Gallagher, cofundadora del NOM (*National Organization of Marriage*). Por su parte, el Centro de derecho y religión de la facultad de derecho de la Universidad vicenciana de St. John en Queens (NYC) acaba de abrir un sitio en internet (CLR Forum, <http://clrforum.org/>) para informar de sus programas y de noticias relacionadas con la religión y el derecho. Y pasando ahora a las referencias personales, el 10 de mayo de 2010 Elena Kagan fue elegida por el presidente Obama para ocupar la silla dejada por el juez Stevens en el Tribunal Supremo. Ese mismo día se hizo público que el anterior *Ambassador-at-Large*, Randolph Marshall Bell, había sido elegido presidente del *First Freedom Center*. El 15 de junio de 2010 la *Catholic University of America* hizo pública la elección del profesor experto en libertad religiosa y relaciones Iglesia y Estado John H. Garvey, entonces decano del *Boston College Law School*, como presidente de la Universidad. Su Santidad Benedicto XVI nombró el 18 de julio de 2010 observador permanente ante Naciones Unidas al arzobispo Francis Assisi Chullikatt, anterior nuncio en Irak y Jordania, sucediendo así en el cargo al arzobispo Celestino Migliore. El 13 de abril de 2011 el embajador norteamericano en Malta (en el cargo desde septiembre del 2009), el profesor católico Douglas Kmiec, presentó finalmente su renuncia –efectiva desde el 15 de agosto– al presidente Obama tras las críticas surgidas en el Departamento de Estado hacia su gestión al frente de la embajada por gastar demasiado tiempo escribiendo y hablando sobre sus creencias en la búsqueda de acuerdos entre las diferentes religiones. El 25 de mayo de 2011 asumió el cargo de capellán número 60 de la Cámara de Representantes del Congreso el padre jesuita Patrick J. Conroy en sustitución del sacerdote Daniel Coughlin en el cargo desde el 2000 hasta el 2011. Y el líder mormón de la iglesia fundamentalista polígama FLDS, Warren Jeffs, se sentó finalmente en el banquillo en San Angelo (Texas) el 28 de julio del 2011 acusado de bigamia y abuso sexual de dos menores de 12 y 14 años de edad. El 9 de agosto fue condenado a cadena perpetua. Finalmente, dentro del obituario de este año, han fallecido los profesores Steven Gey del *Florida State University College of Law* y Steven Goldberg del *Georgetown Law Center*.

Una última consideración. Si se quiere mantener al día en este tipo de cuestiones relativas a la religión y al Estado en Norteamérica, además de otras páginas de internet, una excelente fuente de información, a la que personalmente hemos recurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la elaboración de esta cró-

nica, es la ofrecida por el profesor emérito de la Universidad de Toledo, Howard Friedman, en su blog *religion clause* (<http://religionclause.blogspot.com/>) que lleva operativo desde abril del año 2005. Por medio de este sitio y de los numerosos vínculos que ofrece a todo tipo de fuentes puede seguirse con detalle toda la actualidad en esta clase de cuestiones.

2. BALANCE DEL AÑO 2010-2011

Como no podía ser de otro modo, el poder legislativo, sea federal o estatal, se ha visto en la necesidad de articular a su manera las diversas controversias sociales durante este tiempo. De todas ellas, además de la reforma sanitaria de Obama y sus problemas en relación al aborto y contracepción, la cuestión de la unión civil y el pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido tal vez la más importante, con las objeciones de conciencia que plantea por razones morales y religiosas. En este sentido, el USDOJ ha asegurado no estar dispuesto a defender más la sección 3 de la DOMA (*Defense of Marriage Act* de 1996) y se ha presentando un proyecto de ley para derogarla (*Respect for Marriage Act*). Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New York o Rhode Island han sido Estados en los que se ha planteado con mayor o menor éxito este asunto de las uniones y *same-sex marriage*. Un caso singular en relación a esta misma cuestión fue la derogación de la política DADT (*don't ask, don't tell*) en el ejército norteamericano, lo que suscitó también numerosas reservas religiosas. Asimismo, en el periodo de tiempo de esta crónica hemos visto que, por ejemplo, en Oklahoma y Tennessee, se han presentado iniciativas contra la Sharia y en defensa de los valores propios del sistema jurídico norteamericano. Al mismo tiempo, comités del Congreso federal han abierto sus puertas para tratar el difícil problema de la violencia en el mundo musulmán. Este fue el caso del Comité de la Cámara sobre *Homeland Security* a finales del mes de julio cuando se planteó el problema de la influencia de un grupo islamista somalí entre los musulmanes americanos, reuniéndose bajo el tema de *Al Shabaab: Recruitment and Radicalization within the Muslim American Community and the Threat to the Homeland*. Por su parte, la Casa Blanca hizo público a principios de agosto una medida presidencial a fin de *Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism in the United States*. Ejemplo de esta preocupación es el estudio del *Pew Research Center* realizado en agosto de 2011 sobre unos mil musulmanes americanos (*Americans: No Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism*) negando que se estuviera produciendo una radicalización. Mientras tanto, es cierto que la población musulmana sigue creciendo, su presencia se hace mucho más visible que hace años, la construcción de mezquitas o de otros centros ha provocado controversias (desde la propuesta a

pocas manzanas de la zona cero en NYC hasta esta otra del ayuntamiento de Lilburn (Georgia) que acaba de autorizar, tras aprobar en agosto de 2011 una petición de reordenación urbana, rechazada en dos ocasiones anteriores, para permitirle a una congregación musulmana la construcción de un gran centro de culto), se dice que el FBI se infiltra en las mezquitas para escuchar el tipo de discurso que se ofrece en ellas, y en algún acto aislado también se han producido arrestos tras altercados como los vividos en Rye (NY) el 30 de agosto de este año, ante la negativa de unas mujeres a quitarse el velo en un parque de esa ciudad siguiendo la normativa del mismo. Por todo ello empiezan a sentirse voces que reclaman el principio de reciprocidad en derecho internacional a fin de evitar la concesión de visado a los nacionales de aquellos países en cuyo suelo no se respeta el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos estadounidenses. Finalmente, otros temas con repercusión religiosa sobre los que las cámaras legislativas (federales y estatales) han procurado dar respuesta han sido los de la inmigración (con leyes en este sentido de Alabama y Arizona), protección de la vida humana desde su concepción (el caso de la *Personhood Amendment* en Colorado o Mississippi), simbología religiosa como los memoriales militares, acuerdos restrictivos de asociaciones de vecinos sobre símbolos religiosos, circuncisión masculina, protestas cerca de funerales, discriminación de estudiantes en Universidades, protecciones estatales al uso religioso del suelo, derogación de la enmienda Blaine en Florida, comida Kosher, tenencia de armas en iglesias, venta de bebidas alcohólicas en domingo, bonos escolares, objeciones en materia de vacunación en escuelas, discriminación y acoso escolar, o ampliación de las garantías sobre *free exercise* en Louisiana, Missouri y North Dakota.

Por otra parte, la referencia bibliográfica de este año 2010-2011 y los congresos celebrados en este tiempo nos siguen advirtiendo del papel singular que continúa ejerciendo la libertad religiosa en los Estados Unidos. Si en la primera parte de nuestra crónica pudimos concluir, después del estudio que hicimos en sede jurisprudencial, que la libertad y la religión no se percibían como contrarios en esas tierras, ahora tras el análisis ofrecido en relación a los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo, podemos confirmar aquel juicio, no obstante el matiz peculiar –digamos más ilustrado y secular que la precedente, con esas referencias suyas a la paz y al nuevo orden internacional– a la hora de plantear ciertos temas por parte de la administración Obama.